Documentos de trabajo | Working Papers

<http://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/7376>

No. 5, diciembre, 2018

doi: <https://doi.org/10.16925/wpai.06>

Reporte de investigación | Research Report

Acción de tutela y violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado del departamento de Córdoba

Nuby Dominga Mogollón Anaya

Liliana Anaya Caraballo

Universidad Cooperativa de Colombia

Sede Montería

NOTA LEGAL

El presente documento de trabajo ha sido incluido dentro de nuestro repositorio de literatura gris por solicitud del autor, con fines informativos, educativos o académicos. Asimismo, los argumentos, datos y análisis incluidos en el texto son responsabilidad absoluta del autor y no representan la opinión del Fondo Editorial o de la Universidad.

DISCLAIMER

This working paper has being uploaded to our grey literature repository due to the request of the author. This document should be used for informational, educational or academic purposes. Arguments, data and analysis included in this document represent authors' opinion not the Press or the University.

ACERCA DE LAS AUTORAS | ABOUT THE AUTHORS

Nuby Dominga Mogollón-Anaya, candidata a Magíster en Economía Solidaria para el Desarrollo Territorial, especialista en Gerencia Pública, profesora de tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Derecho de la sede Montería, Colombia.

Correo electrónico: nuby.mogollona@campusucc.edu.co

Liliana Anaya-Caraballo, magíster en Derecho Penal y Criminología, profesora tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Derecho de la sede Montería, Colombia.

Correo electrónico: Liliana.anayac@campusucc.edu.co

CÓMO CITAR ESTE DOCUMENTO | HOW TO CITE THIS WORKING PAPER

Nuby Dominga Mogollón-Anaya y Liliana Anaya-Caraballo. *Acción de tutela y violaciones de los derechos humanos en el conflicto armado del departamento de Córdoba*. (DOCUMENTO DE TRABAJO N° 5). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, (2018). Doi: <https://doi.org/10.16925/wpai.06>.

Este documento puede ser consultado, descargado o reproducido desde nuestro repositorio de documentos de trabajo (<http://repository.uccc.edu.co/handle/ucc/7369>) para uso de sus contenidos, bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

RESUMEN

El presente proyecto de investigación busca analizar por qué en Colombia se ha convertido en una necesidad acudir a la tutela como mecanismo preferente y sumario de protección inmediata de los derechos fundamentales, y, en especial, por qué es necesario recurrir a dicho mecanismo para acceder de manera efectiva a la ayuda humanitaria integral a la cual tiene derecho la población desplazada víctima del conflicto armado interno, cuando se ha establecido que constitucional y legalmente le asiste al Estado la responsabilidad de brindar una adecuada atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica a los desplazados víctimas de la violencia. De ahí que deba establecerse con claridad no solo quiénes ostentan la calidad de víctima, sino también que se analice a cabalidad el uso y la aplicación de la tutela y las líneas jurisprudenciales que surgen de su interposición.

Palabras clave: acción de tutela, ayuda humanitaria, conflicto armado, Córdoba, víctimas.

TABLA DE CONTENIDO

I. Introducción	7
II. La acción de tutela	9
A. Introducción	9
B. Consideraciones generales	10
C. Concepto	13
D. Naturaleza jurídica	15
E. Marco normativo de la acción de tutela	19
1. Normas de tipo constitucional	19
2. Normas de tipo legal	20
3. Normas de tipo internacional acogidas mediante aplicación del bloque de constitucionalidad	21
4. Normas de tipo jurisprudencial	22
F. Características en el sistema constitucional colombiano	23
1. Acceso a la justicia	24
2. Concreción, realidad	26
3. Poder del juez	28
4. Inversión de las reglas usuales de procedimiento	29
5. Trámite preferencial	30
6. Informalidad	30
7. Hacer del derecho constitucional derecho común	31
G. Elementos de la acción de tutela	32
H. Principios orientadores de la acción de tutela	34
1. Publicidad	34
2. Prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental	35
3. Economía	36
4. Celeridad	37
5. Eficacia	38

6. Informalidad	39
I. Objetivo de la acción de tutela	41
J. Contenido de la acción de tutela	41
K. Tutela contra acción u omisión de autoridad pública	42
III. Línea jurisprudencial desplazamiento y mínimo vital	45
A. Introducción	45
B. Consideraciones generales	45
C. Construcción de una línea jurisprudencial	46
1. Metodología	46
2. Objetivo	47
3. Planteamiento del problema	47
4. Identificación del punto inicial de apoyo	47
5. Análisis estructural de las citas del punto inicial de apoyo	49
6. Derechos fundamentales afectados cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los desplazados	54
7. ¿Cómo garantiza la Corte Constitucional el derecho al mínimo vital de las personas desplazadas?	74
IV. Conclusiones	82
V. Referencias	84

Este documento de trabajo lo realizaron investigadores del grupo Gisourbano de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, en el área de Derecho. Las líneas de investigación del grupo son “Análisis de políticas públicas”, y “Sociojurídica, socioeconómica y urbano regional”. El proyecto del que surge el documento se titula “Análisis de la tutela como herramienta de protección de derechos de la población desplazada”, vigencia 2015-2016”, y fue financiado por “Conadi”, a raíz de la convocatoria 2014.

I. INTRODUCCIÓN

La problemática del desplazamiento forzado se ha incrementado de forma exponencial con el transcurrir de los años en el país. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados desde el Gobierno nacional y los entes territoriales para atender la problemática, el impacto positivo de estas acciones sobre los derechos de la población víctima de este delito de lesa humanidad aún no es visible. Además, la política pública de atención no se ha construido con la participación efectiva de la población en situación de desplazamiento forzado, ni en atención a sus particularidades y requerimientos, pues son medidas de tipo asistencial que no tienen presente el estudio del contexto, ni acciones graduales que propendan a la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición como ejes estructurantes de los derechos de las víctimas.

A pesar de las diversas acciones emprendidas por parte del Gobierno nacional y los entes territoriales, en Colombia se presenta aún un incremento en el número de personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno, al tiempo que no se ha logrado el restablecimiento de los derechos de personas que hace más de una década se encuentran en esta situación. Actualmente, muchas de las víctimas deben recurrir a la acción constitucional de tutela para que se les reconozca el derecho a la ayuda humanitaria, la cual ha sido reconocida por la Corte como el derecho fundamental al mínimo vital, se tiene en cuenta y es la respuesta a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a partir de la Sentencia T-025 de 2004 en sus reglas y subreglas, lo que incluye sus autos de seguimiento.

La investigación se ha elaborado con el propósito de mostrar el estado actual en el que se encuentra la figura de la acción de tutela, de manera que se toman elementos como, por ejemplo, jurisprudencia, doctrina y estadísticas de la unidad de víctimas en el periodo 2012-2015, lo cual lleva a determinar que esta acción constitucional ha sido

determinante a la hora de reclamar al Estado la protección y el reconocimiento de los derechos fundamentales para las personas desplazadas, sin embargo, su utilización ha sido indiscriminada y sin un control establecido. Se trata, entonces, de examinar conceptualmente el máximo logro alcanzado por el Constituyente de 1991 a través de la acción constitucional de amparo del mínimo vital a través de la ayuda humanitaria, a fin de determinar las necesidades, las falencias y los factores negativos de los que adolecen las víctimas

II. LA ACCIÓN DE TUTELA

A. *Introducción*

En este capítulo se pretende describir la función de la acción de tutela en cuanto mecanismo preferente y sumario de protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales, con el propósito de demostrar por qué en Colombia se ha convertido en una necesidad acudir a ella para hacer efectiva la entrega de la ayuda humanitaria de la cual debe ser beneficiaria la población desplazada en el país.

Es por lo que, al realizar un análisis pormenorizado de la acción de tutela se confirma lo que, mediante los pronunciamientos establecidos, la Corte Constitucional señala:

La atención a los desplazados debe ser integral, esto es, debe consistir en un conjunto de actos de política pública mediante los cuales se repare moral y materialmente las personas en situación de desplazamiento y, más allá, se produzca el restablecimiento de las mismas, en consonancia con el ordenamiento constitucional y los Principios Rectores.¹

Según la Sentencia T-602 del 2003, lo que se busca es el reconocimiento de la necesidad y el carácter de fuerza vinculante a los “Principios rectores”, pues los considera como parte del bloque de constitucionalidad para resolver casos concretos de reclamo de derechos de la población desplazada, ya que se tienen por sujetos altamente vulnerables en nuestro Estado.

Así las cosas, encontramos que al no hacer efectiva la ayuda humanitaria integral a la cual tienen derecho los desplazados víctimas del conflicto armado colombiano, contemplada en la Ley 387 de 1997,² específicamente en los artículos 2 y 3, y en la

¹ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-602 de 2003. (MP Jaime Araújo Rentería: julio 23 de 2003).

² Cf. Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados

Ley 1448 de 2011³, en sus artículos 49 y 60, respectivamente, omite el Estado la responsabilidad legal que le asiste de brindar una adecuada atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica a los desplazados por la violencia, de manera que se ven obligadas las víctimas a buscar amparo y protección de sus derechos mediante la acción de tutela, ya que las ayudas humanitarias que les debe suministrar el Estado se constituyen, en ocasiones, en su única fuente de ingresos y, por tanto, en la herramienta fundamental para garantizarles el mínimo vital tanto a ellos como a su núcleo familiar.

Al no proporcionar a los desplazados la atención integral que requieren, la acción de tutela cobra un gran protagonismo y se convierte en el instrumento jurídico predilecto para hacer exigibles los derechos de esta población.

Es así como con relación a la acción de tutela, al considerarse un derecho fundamental constitucional y utilizarse para garantizar el derecho al mínimo vital de la población desplazada, surge la cuestión de si está o no cumpliendo dicha acción la finalidad para la cual fue creada, y es justamente por ese motivo que resulta muy importante pasar a describirla.

B. Consideraciones generales

La mayoría de los Estados modernos consideran necesario incluir en su cuerpo normativo apartes de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la cual se ve reflejada en sus textos constitucionales.

En Colombia, luego de la expedición de la Constitución de 1991, se instituye la Nación como un Estado social de derecho, esto es:

internos por la violencia en la República de Colombia. Julio 18 de 1997. Artículos 2 y 3. Reglamentada (desarrollada) por los decretos: 170 de 2008; 2862 de 2007, 1660 de 2007; 2675 de 2005, 2100 de 2005, 250 de 2005; 2284 de 2003, 2131 de 2003; 2562 de 2001, 2007 de 2001, 951 de 2001; 2569 de 2000. Modificada por la Ley 962 de 2005.

³ Cf. Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10 de 2011. DO 48096.

Un sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona en el interior de la sociedad sin privaciones irracionales; para el efecto, al Estado se le atribuye la prestación o coordinación de ciertos servicios. Se trata de un modelo estatal que interviene directamente en la sociedad, en procura de asistencia social y redistribución de la riqueza para mitigar la desigualdad social que hace inoperantes las garantías del Estado de derecho.⁴

La Constitución de 1991 configuró la acción de tutela con el propósito de dar cumplimiento a la carta de la ONU, la cual establece, en su artículo 8, que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.⁵

La Organización de Estados Americanos (OEA), en su “Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999”,⁶ establece qué medidas cautelares tienen en cuenta Colombia, e incluye la posibilidad de acudir a un recurso rápido y sin dilaciones al momento de hacer exigibles los derechos vulnerados o violados a las personas.

En este sentido, la Constitución Política Nacional, en su artículo 86, con respecto a la acción de tutela, establece:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.⁷

⁴ Véase Silva Henao. 2012.

⁵ Véase Naciones Unidas. A. G. *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. (Diciembre 10 de 1948).

⁶ Cf. Organización de Estados Americanos. CIDH. *Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999*. OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 3. (Abril 13 del 2000).

⁷ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia). Art. 86.

Conforme a lo anterior, se tiene que en Colombia los derechos fundamentales tienen como mecanismo de protección a la acción de tutela, siempre y cuando se considere no exista otro mecanismo judicial para la defensa de estos. No obstante, en atención a su objetivo principal, tenemos que no es otro que “proteger de modo inmediato los derechos fundamentales, cuando quiera que sean vulnerados o amenazados”.⁸

El Decreto 2591 de 1991, en su cuerpo contentivo, expresa:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.⁹

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable:

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.¹⁰

En este sentido se tiene que el perjuicio es irremediable, bien sea cuando “estructuralmente muestra que es inminente, urgente, grave e impostergable, de acuerdo con los elementos fácticos que surgen en el proceso de tutela (Sentencia T-225/93);¹¹ o bien cuando “se invoca la tutela como mecanismo transitorio para evitar

⁸ Véase Manuel Quinche. LA ACCIÓN DE TUTELA. EL AMPARO EN COLOMBIA. Editorial Temis. (2011).

⁹ Véase Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Noviembre 19 de 1991.

¹⁰ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

¹¹ Véase Corte Constitucional. Sentencia T-225/93. (MP Vladimiro Naranjo Mesa: Junio 15 de 1993).

un perjuicio irremediable, se debe otorgar el amparo, aunque existan otros medios de defensa”.¹²

C. Concepto

La tutela se concibió como un mecanismo ideado para proteger derechos fundamentales, los cuales considera la Corte Constitucional no son exclusivamente los que se plasman en la Constitución Política Nacional. Al respecto, el profesor Echeverri Uruburu señala:

El Decreto 2591 de 1991 le permitía ampliar el espectro de los llamados Derechos fundamentales con respecto a los originalmente denominados así, fijó como criterios para establecer este tipo de derechos los siguientes:

Principales.

a) Si el derecho es “esencial” de la persona humana y b) Si el constituyente lo reconoció expresamente como fundamental, como ocurre con el art.44 (Derechos fundamentales de los niños)

Auxiliares.

a) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; b) El Art. 85 que enuncia los derechos de aplicación inmediata —que no requieren de desarrollo legal para reclamar su vigencia— y c) La existencia de una “Súper garantía” para su reforma de acuerdo con el artículo 377, que somete a referéndum aprobatorio, si así lo solicita un número determinado de ciudadanos, las enmiendas efectuadas por el Congreso, a los derechos consagrados en el Capítulo I título II y sus mecanismos de protección.

En conclusión. el sistema colombiano adopta un catálogo abierto y hasta cierto punto indeterminado acerca de cuáles son llamados “Derechos Fundamentales”.¹³

¹² Véase Jorge Flórez. CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. Señal Ediciones. (2011).

¹³ Véase Morales Alzate. (2006).

Así, la acción de tutela, “es pues, una garantía constitucional que poseen todas las personas para la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales, tratándose por tanto de un mecanismo de defensa contra el Estado y los particulares que se encuentren en las circunstancias previstas en el Decreto 2591 de 1991”.¹⁴

De ahí que se puede definir como,

La Acción de tutela es en sentido estricto un derecho subjetivo público de la persona o individuo, del cual emana la acción procesal de rango constitucional de tutela y el proceso judicial correspondiente, que tiene por objeto proteger los derechos constitucionales fundamentales de la persona, ante un agravio o amenaza de agravio por un acto u omisión de una autoridad pública (administrativa o jurisdiccional), o de un particular.¹⁵

De lo anterior es posible analizar diversos aspectos. El primero se refiere al hecho de que se hace preciso entrar a desglosar la expresión “derecho subjetivo”, para lo cual debemos asumir que dicho término se refiere a la “facultad concedida por una norma a una persona (sujeto), para obrar (hacer u omitir) lícitamente”.¹⁶

Continúa Parra Benítez: “Para la teoría general del derecho¹⁷, el derecho subjetivo puede ser absoluto, cuando su titular lo puede hacer valer frente a cualquier persona, o relativo, si únicamente puede exigirlo de alguien determinado”.¹⁸

¹⁴ Véase Morales Alzate, *supra*, nota 14. La acción de tutela no solo opera contra el que presta un servicio público, sino también contra aquellos que se encuentren en situación de superioridad frente al reclamante.

¹⁵ Véase Patiño Beltrán. (2010).

¹⁶ *Id.*

¹⁷ La nota al pie de la cita es la siguiente: “Explica que es importante acotar que en la teoría general se explica al derecho subjetivo con la tesis de la voluntad de Windscheid, conforme a la cual el derecho subjetivo es un poder de la voluntad, que atribuye a su titular la posibilidad de actuar lícitamente, o no la tesis del interés de Ihering, que indica que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Se afirma, con todo, que el derecho subjetivo es “un poder reconocido y atribuido por el ordenamiento jurídico a una persona para que, dentro de su ámbito de libertad, actúe de la manera que estime más conveniente a fin de satisfacer sus necesidades e intereses, aunque siempre delimitado por el interés general de la sociedad. Cfr. Moreno Quesada, Bernardo et al. Curso de Derecho Civil I, Parte general y derecho de la persona, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, págs. 251”. Véase Parra Benítez. (2011). Nota 44.

¹⁸ *Id.*

En el caso que nos ocupa, debería entenderse entonces la acción de tutela como un derecho subjetivo absoluto, puesto que es posible el amparo o la protección de los derechos constitucionales del individuo frente a cualquier persona, bien sea natural o jurídica, de derecho público o privada, a fin de que cese la vulneración o el agravio de dichos bienes jurídicos considerados esenciales e inherentes a la persona.

D. *Naturaleza jurídica*

Es imperativo señalar entonces la naturaleza de la acción de tutela, por lo cual la Corte Constitucional, en la Sentencia C-531 de 1993, ha considerado que “la acción de tutela como tal tiene el carácter de Derecho Fundamental toda vez que es el instrumento concebido por el constituyente para garantizar la protección de los restantes Derechos Fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y arriesgarían esfumarse”.¹⁹

Es, por ende, viable inferir que la acción de tutela es de tipo proteccionista. En este sentido, la teoría de Luigi Ferrajoli en *Derecho y razón. Teoría del garantismo penal*, señala: “El derecho es la garantía de los más débiles frente a los más poderosos”.²⁰ Con respecto a esto, es factible establecer que, en el garantismo en materia de derechos fundamentales, es imperativo referirse a los derechos fundamentales de las personas y su especial protección en el ordenamiento jurídico nacional. De ahí Ferrajoli añade: “Hay que distinguir entre los que son y los que no son derechos fundamentales. Es decir, los derechos al ser universales y al establecer que son de ‘todos’, constituyen elementos de distinción entre los que son derechos fundamentales y los que no son derechos fundamentales”.²¹

Es así como, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario —antes que nada— delimitar qué se entiende por *derechos fundamentales*, para lo cual en virtud de dicha

¹⁹ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-531/93. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: noviembre 11 de 1993).

²⁰ Véase Luigi Ferrajoli. DERECHO Y RAZÓN. TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. Editorial Trotta. (2005).

²¹ *Id.*

teoría se tiene que “los derechos al ser universales y al establecer que son de ‘todos’, son aquellos a ‘quienes su titularidad esté normativamente reconocida’. Y normativamente reconocidos están aún vigentes dos tipos de estatus: la ciudadanía y la capacidad”.²²

El profesor Tulio Chinchilla define los derechos fundamentales como derechos humanos constitucionalizados y con garantía reforzada. En este sentido señala que “son derechos humanos que han adquirido la positivización necesaria preferentemente en el orden constitucional, y que, por lo tanto, logran un alto grado de certeza y posibilidad garante efectiva, propias de lo que tradicionalmente se conoce con la expresión derecho subjetivo”.²³

Es por lo que, Ferrajoli observa cómo,

Los grandes triunfos de la humanidad²⁴ a la luz de los conceptos clásicos de derecho objetivo (y particularmente de la teoría Kelseniana de que un derecho subjetivo es el reflejo de un deber) ante la carencia material de ‘garantías’ no constituirían derecho; y busca sustentar la idea de un derecho que, para su existencia, no tenga necesidad de acudir a la existencia de la garantía.

Por tanto, resulta sumamente extraño que se deba acudir a la acción de tutela para proteger y amparar derechos fundamentales cuando, supuestamente, no es requisito la existencia de una garantía adicional para su especial satisfacción y acceso.

Por su parte, Ferrajoli afirma:

Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto a dotados de status de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y

²² *Id.*

²³ Véase Tulio Chinchilla. ¿QUÉ SON Y CUÁLES SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? Temis. (1999).

²⁴ Los grandes triunfos de la humanidad a los que se refiere el autor son, por ejemplo, las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos.

por status la condición de un sujeto, prevista de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicios de éstas.²⁵

De allí que sea necesario realizar, en el marco de este ejercicio investigativo, un estudio pormenorizado del estatus que ocupan en la sociedad los desplazados y la acreditación real que los faculta para ser verdaderos legitimados llamados a interponer la acción de tutela para la protección y amparo de sus derechos.

Con respecto a la naturaleza de la acción de tutela, al ser esta —como ya se mencionó— de corte garantista, debe estudiarse con miras además a los postulados de Robert Alexy en su teoría constitucionalista,²⁶ la cual ofrece un panorama del manejo lógico del derecho y analiza la razón de ser del establecimiento de derechos primarios o fundamentales, así como su aplicabilidad.

En su obra, Alexy busca “dar respuestas racionalmente fundamentadas a las cuestiones vinculadas con los derechos fundamentales”.²⁷ De acuerdo con esta teoría, se busca investigar los conceptos de derechos fundamentales, su influencia en el sistema jurídico y la fundamentación de los derechos fundamentales.

Asimismo, afirma Alexy:

Una norma de derecho fundamental, según su estructura puede ser principio o regla (p. 83). Los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces hay que hacer exactamente lo que ella exige. Por tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en lo fáctico como en lo jurídico. La diferencia entre regla y principios no es de grado, sino cualitativa (pp. 86 y 87).²⁸

²⁵ Véase Luigi Ferrajoli. LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Trotta. (2001).

²⁶ Cf. Robert Alexy. TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. (2008).

²⁷ *Id.* Pág. 254.

²⁸ *Id.*

De modo que puede entenderse en este caso que las reglas corresponden a mandatos definitivos y, por tanto, son la realidad fáctica, el mundo del ser. Asimismo, los principios atañen al “estándar que ha de ser observado”, por ser una exigencia de la justicia como ideal de corrección moral. Finalmente, la directriz es el tipo de estándar que propone un objetivo que ha de ser alcanzado.²⁹

Se tiene entonces que los principios desempeñan un papel constitutivo del orden jurídico. Las reglas, aunque estén escritas en la Constitución, no son más que leyes reforzadas por su forma especial. Las reglas no tienen ninguna fuerza constitutiva fuera de lo que ellas mismas significan. A las reglas es posible aplicarles métodos de la interpretación jurídica,³⁰ mientras que a los principios no hay necesidad de aplicarlas, pues poco o nada hay que interpretar.

De ahí que en el caso particular de este estudio habría que analizar si al ser tanto el mínimo vital como la acción de tutela unos derechos fundamentales, cuál debe ser visto como principio y cual. como regla, o si ambos se perciben y se toman en igual sentido, y si existe o no una contradicción entre ellos.

De acuerdo con esta teoría:

Cuando existe un conflicto entre reglas, hay dos formas de solucionarlo. La primera es introduciendo en una de las reglas una cláusula de excepción que elimina el conflicto. La segunda es declarando inválida por lo menos una de las reglas, a través de reglas tales como *lex posterior derogat legi priori* o *lex specialis derogat legi generali*, aunque también es posible proceder con la importancia de las reglas en conflicto. En todo caso, la decisión que se toma para solucionar un conflicto de reglas es una decisión acerca de la validez de alguna de ellas (p. 88). El conflicto o colisión entre principios no es un

²⁹ Dworkin. (1989).

³⁰ Método gramatical o literal, sistemático, histórico, genético, teológico, etc.; es decir, todos aquellos que le corresponde estudiar a la hermenéutica jurídica para lograr que el significado que se le asigne a una ley o un contrato sea razonable.

problema que se resuelve haciendo que un principio invalide a otro, sino ponderando a qué principio se le debe dar un mayor peso específico.³¹

Razón por la cual habría que observar el porqué de la importancia de la tutela como defensa de derechos fundamentales, aun cuando ella en sí misma es un derecho fundamental.

E. Marco normativo de la acción de tutela

En lo referente a la normatividad que se encarga de regular la acción de tutela en Colombia, es importante anotar, como lo hace Quinche,³² que deben estudiarse las normas de tipo constitucional, las de tipo legal y las jurisprudenciales.

I. Normas de tipo constitucional

Con relación a estas normas, luego de realizar un análisis previo de las disposiciones contenidas en la Carta Política y, de acuerdo con Quinche,

En el Plano Constitucional, las normas de referencia directa son el artículo 40, que contiene el derecho fundamental al ejercicio y control del poder político; el artículo 86, que dispone la estructura general de la acción; y el artículo 241, que en el numeral 9 prevé la competencia de la Corte Constitucional para revisar los fallos de tutela proferidos por los demás despachos judiciales.³³

El artículo 40³⁴ de la Constitución Política nacional, el cual establece los derechos políticos de los habitantes del Estado, señala: “Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”; de ahí que al hablar del ejercicio del control sea necesario referirse a acciones como, por ejemplo, la tutela, que sirven, entre otras cosas, como un mecanismo para la

³¹ Véase Robert Alexy, *supra*, nota 28.

³² Cf. Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

³³ *Id.*

³⁴ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 40.

intervención de las personas en defensa de la constitución y las leyes cuando consideren que se vulneran o amenazan los derechos fundamentales.

El artículo 86³⁵, contenido de la estructura de la acción de tutela que desarrolla ampliamente el Decreto 2591 de 1991, el cual habilita a cualquier persona a interponer esta acción, establece quiénes son titulares de ella, los derechos que protege, plantea su procedencia, señala qué jueces son competentes para conocerla, y ofrece orientación con respecto a la forma en que debe solicitarse y el procedimiento de esta; asimismo, con respecto a los alcances y los efectos de la sentencia de tutela, explica cuáles son los recursos que proceden contra su fallo.

El artículo 241³⁶ constitucional le asigna una función especial a la Corte Constitucional en lo relativo a la revisión de los fallos sobre tutelas, de manera que recae sobre esta corporación la finalidad de decidir en última ratio con relación a los derechos que han sido invocados por intermedio de la acción estudiada.

Una vez claro lo anterior, se debe entonces pasar a explicar el punto referente a las leyes.

2. Normas de tipo legal

En este aspecto, Pérez Escobar señala: “El referente legal se realiza a través de los Decretos con fuerza de ley N.º 2591 de 1991³⁷ y el Decreto reglamentario N.º 306 de 1992”.³⁸ Con relación a este mismo asunto, Quinche expresa que “se tiene la Ley 270 de 1996, ‘Estatutaria de la administración de justicia’, tal como fue modificada por la Ley 1285 de 2009”.³⁹

De las normas citadas por los autores, cabe resaltar lo relacionado con los principios de gratuidad y estructura de la jurisdicción constitucional. Añade el autor

³⁵ *Id.* Art. 86.

³⁶ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 241.

³⁷ Véase Decreto 2591 de 1991, *supra*, nota 10.

³⁸ Véase Jacobo Pérez Escobar. DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. Editorial Temis. (2003)

³⁹ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

cómo “una segunda norma decisiva es el Decreto 2591 de 1991”, de manera que es importante anotar que se constituye en una de las más importantes sobre acción de tutela y regula la totalidad de su ejercicio y operación.

En lo relativo a las disposiciones de tipo legal referentes a la acción de tutela, cabe resaltar también que algunos autores, como, por ejemplo, Manuel Quinche, incorporan dentro de las norma reguladoras de tipo legal los decretos reglamentarios 306 de 1992,⁴⁰ el 1382 del 2000⁴¹ y los reglamentos de las altas cortes, como, por ejemplo, el “Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia”,⁴² el “Reglamento Interno del Consejo de Estado”⁴³ y el “Reglamento Interno de la Corte Constitucional”.⁴⁴

3. Normas de tipo internacional acogidas mediante aplicación del bloque de constitucionalidad

Es importante manifestar aquí que se trata, básicamente, de tratados que consagran normas de derecho internacional humanitario o normas cuya suspensión está prohibida en estados de excepción, las cuales se consideran parte integral de la normatividad estatal. Entre estas se encuentran las disposiciones consagradas en el artículo 27 de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”;⁴⁵ los cuatro

⁴⁰ Cf. Decreto 306 de 1992. Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991 (Acción de tutela). Febrero 19 de 1992. DO 40344.

⁴¹ Cf. Decreto 1382 de 2000. Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela. (Julio 12 de 2000). DO 44082.

⁴² Cf. Reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Acuerdo 1 de 2002. Disponible en <http://www.cortedecuentas.gob.sv/archivo/blah/Reglamento%20Interno%20CSJ.pdf>

⁴³ Cf. Reglamento Interno del Consejo de Estado. Acuerdo 58 de 1999, modificado por el acuerdo 55 de 2003. Disponible en <http://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/arbol/9937.htm>

⁴⁴ Cf. Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Acuerdo 5 de 1992. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/reglamento.php>

⁴⁵ Las cuales están incluidas en el bloque de constitucionalidad: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (Art. 3); derecho a la vida (Art. 4); derecho a la integridad personal (Art. 5); prohibiciones de la esclavitud y servidumbre (Art. 6); principio de legalidad y retroactividad (Art. 9); libertad de conciencia y de religión (Art. 12); protección a la familia (Art. 17); derecho al nombre (Art. 18); derechos del niño (Art. 19); derecho a la nacionalidad (Art. 20); derechos políticos (Art. 23); y las garantías judiciales indispensables para la protección de los anteriores derechos, como, por ejemplo, el debido proceso o el derecho a una defensa técnica. Véase Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Diciembre 30 de 1972. DO 33780.

convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, ratificados por Colombia mediante la Ley 5 de 1960⁴⁶; los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Colombia mediante la Ley 171 de 1994,⁴⁷ y a los cuales hace alusión la Corte Constitucional en la Sentencia C-225/95; el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva,⁴⁸ ratificado mediante la Ley 27 de 1976;⁴⁹ el Convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión de empleo ratificado por Colombia con la Ley 515 de 1999;⁵⁰ así como el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación ratificado por Colombia mediante la Ley 704 de 2001.

4. Normas de tipo jurisprudencial

Son aquellos criterios de interpretación y aplicación de las fuentes del derecho que emana del Tribunal Supremo, es decir, derivadas de la expedición de fallos judiciales; es por lo que, de acuerdo con Quinche, “en la jurisprudencia, y especialmente al solucionar los casos difíciles o complejos, se formulan “normas adscritas”, es decir, verdaderas reglas de origen judicial que resuelven el caso en estudio y los casos posteriores similares, a modo de precedente”.⁵¹

⁴⁶ I. Para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña; II. Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. III. Relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. IV. Relativo a la protección de la población civil.

⁴⁷ I. El Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), ratificado por Colombia mediante Ley 11 de 1992; II. El Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).

⁴⁸ La Corte Constitucional en la Sentencia T-568/99 afirmó que los derechos laborales y de sindicalización son derechos humanos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción.

⁴⁹ Cf. Ley 27 de 1976. Por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo, relativo a la aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación colectiva, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra 1949). Febrero 27 de 1976. DO 34642.

⁵⁰ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-170/04. (MP Rodrigo Escobar Gil: marzo 2 de 2004).

⁵¹ Cf. Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

Bernal afirma, con relación a ese tipo jurisprudencial, lo siguiente: “La jurisprudencia se encarga de fundamentar y concretar dichas normas que reciben la denominación de normas adscritas, porque se adscriben a las disposiciones existentes en las normas jurídicas”.⁵² Luego, explica lo anterior cuando manifiesta: “Las normas contenidas en la jurisprudencia (cualquiera sea el nombre que se les adjudique, vinculan a su destinatario”.⁵³

Para mayor claridad, es necesario entender que la Corte Constitucional ha manifestado en diversas oportunidades: “Respetar el precedente para quienes administran justicia no es una opción más dentro de nuestro complejo sistema jurídico, sino un deber, porque es a través del ejercicio de esta actividad que se asegura de manera definitiva la eficacia de los derechos constitucionales”.⁵⁴

F. Características en el sistema constitucional colombiano

En cuanto a las características es posible anotar que,

Su procedimiento es preferente (economía procesal), sumario (no hay que esperar contradicción). Produce la protección inmediata de los derechos fundamentales (no hay que esperar que la sentencia quede ejecutoriada).

Hay lugar a interponer la tutela cuando se esté vulnerando o amenazando un derecho fundamental.

La protección consiste en una orden para que la persona que vulnere el derecho cese su actuación.⁵⁵

⁵² Véase C. Bernal. (2003).

⁵³ *Id.*

⁵⁴ Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-292. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: abril 6 de 2006).

⁵⁵ Véase Jorge Flórez, *supra*, nota 13.

En este punto es importante hacer claridad respecto a cuáles serán las características para enunciar y explicar, por lo que tomaremos para tal fin las establecidas por Quinche.⁵⁶

Con base en lo anterior, es necesario empezar por señalar que Quinche cita la “Introducción a la constitución de 1991⁵⁷, de José Manuel Cepeda, un documento de la Presidencia de la República, en el que señaló como principales características de la acción: el acceso a la justicia, la concreción, un juez poderoso, inversión de las reglas usuales del procedimiento, el trámite preferencial, la informalidad y el hacer del derecho constitucional derecho común.

Estos planteamientos los reitera la Corte Constitucional en el 2010, mediante Sentencia T-505,⁵⁸ en la cual se retoman y explican los elementos de esta y se ahonda en el tema de la tutela contra providencias judiciales.

En igual sentido, es importante señalar que esas características mencionadas tienden a “la búsqueda de la verdad, la cual aparece como una condición básica para que los demás derechos sean garantizados”;⁵⁹ de manera que, una vez conocida la verdad del acaecimiento de las vulneraciones de derechos de la población desplazada, podrán garantizarse los derechos a la justicia y a la reparación de esta población.

A continuación, se explica de forma amplia cada una de esas características.

I. Acceso a la justicia

Debe entenderse de la manera en que “la acción de tutela como ninguna otra, propicia el contacto directo del ciudadano con la administración de justicia, en la medida en

⁵⁶ Cf. Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ Para saber más respecto al tema, véase Sentencia T-505/10. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: junio 17 de 2010).

⁵⁹ Véase Botero, Catalina y Restrepo (2006). Acúdase a esta fuente a fin de observar y realizar un análisis del contenido y alcance de los derechos de las víctimas de crímenes atroces cometidos en los estándares internacionales de derechos humanos y en el bloque de constitucionalidad colombiano.

que no exige la mediación del letrado o abogado, como acontece con las acciones derivadas de los códigos y de las leyes”.⁶⁰

De esta característica podemos resaltar que, cuando se habla de la posibilidad del acercamiento entre el ciudadano y la administración de justicia, debemos referirnos al artículo 86 de la Carta Política, en el que se lee: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar”.⁶¹

A lo que se refiere es a que, sin importar condición, estirpe, sexo o religión, cualquier persona sin distinción alguna tiene derecho a que se amparen o se protejan sus derechos fundamentales de una vulneración o amenaza de vulneración, y esos reclamos de la protección especial deben hacerse ante cualquier juez de la República, sin importar el lugar donde se encuentre.

De ahí que el literal “a” del artículo 152 de la Carta y en observancia de lo dispuesto en el artículo 228 *idem*, expidió la Ley 270 de 1996, en cuyo artículo 1º dispuso:

La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.⁶²

Ahora bien, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-030/05, precisó:

El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas

⁶⁰ Cf. Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

⁶¹ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 86.

⁶² Véase Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. Marzo 15 de 1996. DO 42745.

circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados.⁶³

Se ratifica así la posición que se presentó inicialmente presentada, en la que el tema del acceso a la justicia cuando de acción de tutela se trata y, en especial de aquella impetrada por los desplazados, debe ser resuelta y tramitada de forma rápida y efectiva por el juez ante quien se interponga.

Es decir, con esta característica el Estado busca que sus ciudadanos sientan confianza y seguridad con respecto a la posibilidad que tienen de acceder al desarrollo de un proceso judicial sin intermediación y que sus peticiones se atiendan de forma preferente y rápida.

Es importante observar también que al no necesitar la intervención de un abogado para la interposición del recurso, se estimula una apropiación del ciudadano hacia el sentido mismo de la Constitución y se convierte en un punto focal de modificación de las formas de interpretación de los recursos jurídicos, ya que entiende la sociedad que dichos recursos no solo pertenecen a unos pocos conocedores de las normas, sino que ayuda a interpretar la práctica jurídica de forma distinta al darle la posibilidad real a las personas de acudir con sus propias palabras y expresar ante un juez los problemas que presentan e intentar solucionarlos de forma directa.

2. Concreción, realidad

Esta característica de la acción de tutela resulta ser algo especial, porque según Quinche, “el despliegue de esta característica permitirá modificar uno de los lastres

⁶³ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-030/05. (MP Jaime Córdoba Triviño: enero 21 de 2005).

más notorios del derecho en Colombia: la hipocresía, el enmascaramiento, el del uso del lenguaje que oculta las practicas del dominio y del poder, el uso de eufemismos”.⁶⁴

En este aspecto, esta concreción es posible asumirla en el sentido de que la misma hace referencia a la forma cómo, mediante dicha acción, se tratan sin máscaras y maquillajes asuntos relacionados con la afectación de los núcleos esenciales de los derechos vulnerados en nuestro Estado social.

En igual sentido se develan asuntos del real acontecer dentro de la vida nacional que dejan entrever desigualdades muy marcadas en la sociedad, que con el uso de la acción de tutela quedan expuestas a la luz del Derecho, en procura del restablecimiento de las condiciones de equidad que se supone deben primar en el país.⁶⁵

En el caso, por ejemplo, de los desplazados, resultan ser ellos víctimas de gran cantidad de acciones discriminatorias⁶⁶ y vulneradoras de derechos que los revictimizan y degradan, de modo tal que mancillan su ser y su estima propia.⁶⁷

Razón por la cual esta acción se refiere a actuaciones concretas de la realidad social y, con ella, el sector judicial encaró de frente la situación de indefensión en la

⁶⁴ Cf. Manuel Quinche, *supra*, nota 8. Pág. 43.

⁶⁵ Cf. Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado (Asdi) de la Defensoría del Pueblo. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS. (2003).

⁶⁶ Por ejemplo, cuando van a buscar un empleo, les cierran las puertas, porque considera la sociedad que son personas no aptas para desarrollar las labores propias de los trabajos a los que aspiran, pues en su mayoría son de bajos recursos económicos que han dedicado su vida al campo y no cuentan con mayor cualificación que permita realizar de forma efectiva la diversidad de oficios propios de las ciudades donde se ven obligados a asentarse.

⁶⁷ Cf. Anaya, González y Galindo. (2010). Al hablar de revictimización, o de una nueva victimización, entrarían a hacer parte de ese tipo de acciones las que se derivan de los gastos de los procesos judiciales, cuando los desplazados requieren de los servicios de un abogado o cuando es necesario interponer acciones contra el Estado en busca de acceder a una reparación administrativa, pues claro está que esta población no cuenta con recursos económicos suficientes y se ven llamados a conseguir un dinero de donde no lo hay para pagar los honorarios, entre otros, y solo por nombrar algunos. Al respecto, véase Coordinación de Atención al Desplazamiento Forzado (Asdi) de la Defensoría del Pueblo, *supra*, nota 69.

que se encontraban muchos de los habitantes del territorio nacional que ven en la acción de tutela una esperanza para darle solución a la problemática que los aqueja.⁶⁸

3. Poder del juez

Respecto a esta característica, se tiene que encuentra su razón de ser, principalmente, en la facultad del juez de tutelas de tener prevalencia sobre cualquier otra jurisdicción, pues sus fallos se relacionan con derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, jerárquicamente hablando, los fallos de tutela son tremendamente efectivos en el ordenamiento jurídico nacional. Al respecto señala Quinche: “El juez de tutela es poderoso en otro sentido, en sentido activo⁶⁹, pues en virtud de la facultad dar órdenes, puede hacer lo que ningún otro juez puede, es decir, restituir la integridad a un Derecho fundamental”.

En este sentido es importante establecer que, en Colombia, antes que dar órdenes, los jueces se limitaban a dar declaraciones; no obstante, en el caso del juez constitucional, puede mediante órdenes⁷⁰, exhortos⁷¹, llamados de atención o cualquier otro mecanismo realizar una actividad directa en defensa de los derechos fundamentales. Es así que, esta característica debe interpretarse desde el entendido que los jueces de tutela ocupan una jerarquía importante al momento de administrar justicia, pues sus pronunciamientos gozan de una consideración especial que se basa, principalmente, en realizar mediante cualquier mecanismo la protección y el amparo inmediato de los derechos amenazados o vulnerados.

⁶⁸ Falta de oportunidades educativas, dificultad de acceso a bienes y servicios, falta de sustento, inseguridad, miseria y hambre.

⁶⁹ “Sentido activo” aquí se refiere a la potestad de actuar modificando situaciones jurídicas tendientes a la protección y el amparo de derechos fundamentales.

⁷⁰ La Real Academia de la Lengua Española proporciona esta acepción: “Dar órdenes. 1. loc. verb. Dicho de un superior mandar”. Véase

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=hqvwQJd0tDXX23TTynDj#a_la_orden

⁷¹ Un *exhorto*, según el Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española, es: “(1.ª pers. de sing. del pres. de indic. de *exhortar*, fórmula que el juez emplea en ciertos despachos). 1. m. *Der.* Despacho que libra un juez a otro de igual categoría para que mande dar cumplimiento a lo que le pide”. Véase <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=QjbOntpGMDXX2E0wGJcy>

En el caso que nos ocupa, se ve reflejado cuando el juez, por medio de sentencia, expresa que la población desplazada goza de una especialidad que está dada por su vulnerabilidad, al haber sido desplazada de su entorno y despojada de sus tierras y sus bienes y, por tanto, deben ser restituidas a esta las condiciones iniciales en las que se encontraba antes de la amenaza de sus derechos y la obtención de un mínimo vital que le permita dignificar su situación.

4. Inversión de las reglas usuales de procedimiento

En este asunto hay que dejar claro que la tutela es la realización efectiva del derecho por medio de un procedimiento rápido, lo cual supone un procedimiento “preferente y sumario”,⁷² de ahí que no deban agotarse las instancias procesales típicas de cualquier actuación distinta a ella.

Según Quinche, “esta es una consecuencia de los principios de informalidad y de prevalencia del orden sustancial sobre el procedimental”.⁷³ Es por lo que, para proferir fallo, muchas veces no es necesaria la práctica de las pruebas que se solicitan y, por lo general, no hay una contestación a la solicitud de protección y amparo de los derechos. Esta acción no finaliza, como ocurre por lo general en otro tipo de procesos, con la ejecución del fallo; solo hasta que esté totalmente restablecido el derecho vulnerado o se hayan eliminado todas las causas de la amenaza que dieron lugar a interponer la tutela.

De ahí otra condición de especialidad, la cual permite generar confianza en el aparato jurisdiccional estatal, pues el desplazado siente que al interponer la acción va a constituir esto prenda de garantía para la resolución favorable de sus peticiones, casi siempre consistentes en hacer valer un derecho o la entrega efectiva de un beneficio ofrecido por el Gobierno.

⁷² Véase Decreto 2591 de 1991, *supra*, nota 10. Art. 1 y 18.

⁷³ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

5. Trámite preferencial

Al respecto, cabe anotar que la acción de tutela busca que, de forma casi inmediata, se resuelvan situaciones jurídicas adversas a la protección y al amparo de derechos, así como establece términos para el ejercicio de acciones disciplinarias para aquellas personas que con la obligación de emitir fallo dentro de los 10 días siguientes a la presentación de esta no lo hagan.

Prima aquí la celeridad, y esa preferencia en el trámite hace referencia a que el juez la tramitará con prelación a otros asuntos, salvo la acción de hábeas corpus.⁷⁴ Los plazos son perentorios e improrrogables.

Actúa esta acción como una solución excepcional cuyo objetivo principal es la protección efectiva de derechos fundamentales violados o vulnerados, de manera que, en el caso de los desplazados, por tratarse de sujetos de especial protección legal y constitucional, los fallos de estos asuntos deben darse con suma urgencia y con mayor prioridad que un trámite gestionado por la justicia ordinaria.

6. Informalidad

Es importante establecer que “la tutela, como acción de garantía, busca limitar el formalismo y propiciar decisiones sustantivas que permitan hacer realidad la regla según la cual ‘la finalidad de la norma procesal es ser medio para la efectiva realización del derecho material’”.⁷⁵ Quiere decir este ítem que la tutela es un medio utilizado para administrar justicia y, en virtud de ello, esa justicia no puede verse

⁷⁴ “Habeas corpus. ‘Garantía típica de la libertad’. Principio constitucional por el cual, cuando el derecho lesionado o amenazado sea la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo de la forma o condiciones de detención o de la desaparición forzada de personas, esta acción puede ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez debe resolver de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”. Esto es, un derecho fundamental a la libertad que se ha visto afectado. Véase Mabel Goldstein. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Editora Cultural Internacional. (2010).

⁷⁵ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA. T-1306/01. (MP Marco Monroy Cabra: diciembre 6 del 2001).

sacrificada o mermada por la falta de formalidades en la presentación de dicho instrumento.

Por tanto, la acción de tutela, al ser una herramienta jurídica excepcional, debe estar exenta de cualquier formalidad distinta a las lógicamente requeridas como, por ejemplo, la identificación del accionante, quién se supone que está vulnerando el derecho, en qué consiste la vulneración, las pruebas del hecho acusado, los derechos vulnerados o amenazados y un lugar para notificaciones; es decir, la formalidad pasa a un segundo plano en procura de la defensa inmediata de los derechos de la población.

De lo que se trata es de proteger los derechos sin importar cuál fue la forma de presentación de la solicitud de amparo de estos, ya que prima el fondo de la solicitud y no la forma o el mecanismo mediante el cual se tramitan.

7. Hacer del derecho constitucional derecho común

Esta característica se refiere a que “el derecho no es el objeto de propiedad de uno, sino que debe ser el objeto del cuidado de todos”.⁷⁶ De esta manera, la acción de tutela, al poder ser interpuesta por cualquier persona y no requerir mayor formalidad para su presentación, se convierte en un instrumento de uso directo de todos los ciudadanos. Así, al poder ser interpuesta por cualquier persona, la acción de tutela se convierte en un mecanismo cuyo actor es indeterminado y no requiere esta calidad especial alguna para impetrar este recurso.

En este aspecto se hace necesario reconocer a los desplazados como una población vulnerable y excluida de la esfera de algunas actividades de tipo social, de forma que la acción de tutela llega a convertirse en el medio principal de acceso a la justicia para este tipo de población, pues al no requerir de abogado y de formalidad

⁷⁶ Véase Gustavo Zagrebelsky. EL DERECHO DÚCTIL: LEY, DERECHOS, JUSTICIA. Trotta. (1997). Pág. 153.

alguna para su presentación, basta con presentar la evidencia de la vulneración de sus derechos para que su solicitud la tenga en cuenta el juez competente.

G. Elementos de la acción de tutela

Cuando nos referimos a *elementos*, se trata de los principios básicos y fundamentales de la acción, esos requisitos sin los cuales esta se desconfiguraría. De ahí que al analizar el artículo 86 de la Constitución, el cual habla de la acción de tutela, se infiere que el requisito que no puede faltar y es esencial para que proceda la acción, es el que se “trate de evitar un perjuicio irremediable”;⁷⁷ caso en el cual se otorga esta como un mecanismo de protección especial. De ahí que el perjuicio irremediable debe entenderse como el “efecto de perjudicar o perjudicarse”⁷⁸, y perjudicar significa, según el mismo diccionario, “ocasionar daño o menoscabo material o moral”.⁷⁹ Entendido de ese modo, existe perjuicio cuando se presenta un daño o menoscabo material o moral injustificado, es decir, no como consecuencia de una acción legítima.

Es así que, se establece la viabilidad de la acción para evitar que el bien jurídicamente protegido se deteriore de forma irreversible hasta tal punto que ya no puede ser recuperado en su integridad. Ahora bien, a fin de establecer el perjuicio irremediable, según la Corte Constitucional, se requiere que concurren cuatro condiciones:

- El perjuicio ha de ser inminente.
- Las medidas para corregirlo deben ser urgentes.
- El daño debe ser grave.
- Su protección impostergable.

Estas condiciones las desarrolla la Sentencia T-1225 del 2004, a saber:

⁷⁷ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 86.

⁷⁸ Véase DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA CASTELLANA. (2009).

⁷⁹ *Id.*

A) INMINENTE. Que amenaza o está por suceder prontamente. Se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo.

B) URGENTE. Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia.

Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.

C) GRAVE. No basta cualquier perjuicio se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconvenientes.

D) IMPOSTERGABLE. La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergradable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna.

H. Principios orientadores de la acción de tutela

Antes de entrar en detalle con relación a este ítem, es posible entender a “los principios como reglas o normas que orientan la acción de un ser humano”.⁸⁰ Se trata de normas de carácter general que ayudan a orientar la vida de los habitantes de una determinada población. De ahí que se haga necesario establecer parámetros para el uso y la aplicación de la acción de tutela entre los que es posible encontrar los siguientes principios.

I. Publicidad

Con relación a este principio es válido manifestar que la publicidad se da cuando las decisiones del juez son de naturaleza pública, es decir, que no son secretas, pues de ser así, violaría los derechos de los intervinientes en dicha acción, por lo cual esta podría ser objeto de nulidad, o bien de una futura acción de tutela en contra del juzgado que profirió el fallo por la violación de los derechos al debido proceso e igualdad. En atención a este principio se debe tener en cuenta que los expedientes no son públicos, sin embargo, las actuaciones en todo caso sí lo son.

Ahora bien, Morales Molina considera que “los actos de la justicia deben estar a la vista de todos, para que otras personas sigan y controlen la marcha del proceso”,⁸¹ y aun cuando este autor escribió su obra fuera de la lógica que implica la expedición de la Constitución del 91, este postulado hoy permanece vigente y se ve reflejado en la actualidad cuando notamos que, si bien no se pueda acceder al expediente, sí se profirió algún acto que resultare relevante, como es el caso de la sentencia, la práctica de pruebas, etc.; esas actuaciones deben hacérselas saber al público a fin de estar en capacidad de establecer en qué parte del proceso se encuentran.

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ Véase Morales Molina. (1985).

De acuerdo con Barreto Rodríguez, “el procedimiento de tutela no está cubierto por la reserva en ningún momento, por lo que es un trámite público”.⁸² En este sentido encontramos que dejar de velar por la publicidad de las actuaciones en los procedimientos de tutela se constituye en una clara violación a los derechos fundamentales de las partes.

De tal suerte que, para algunos ítems, con respecto a este principio orientador, la Corte Constitucional, en Auto 364 de 2010⁸³, reitera:

Recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligación de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino también a los terceros que tengan un interés jurídico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a través de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptadas que le sean contrarias.

En este entendido, la publicidad es un requisito de validez del acto y, sin ella, se vulneran o amenazan derechos esenciales, por lo cual la interposición de dicha acción de tutela no tendría razón de ser, ya que sería violatoria de la constitución y las leyes.

2. Prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental

Según Quinche, es aplicable este principio porque “quien invoca la vía de hecho ataca providencias judiciales formalmente validas, es decir, autos y sentencias que usualmente han observado los pasos formales de su producción, pero que, a pesar de la fidelidad a las formas, constituyen violaciones de los derechos fundamentales, especialmente del debido proceso”.⁸⁴

⁸² Véase José Barreto Rodríguez. ACCIÓN DE TUTELA: TEORÍA Y PRÁCTICA. Legis Editores. (2001).

⁸³ Véase Corte Constitucional de Colombia. AUTO 364 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: noviembre 12 de 2010).

⁸⁴ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

Es así cómo a fin de interpretar de forma adecuada el caso descrito se debe tomar lo preceptuado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,⁸⁵ la cual ha indicado que “el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y esta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades”. De ahí que sea posible afirmar que la realidad prima siempre sobre la formalidad y, cuando se presenta el caso contrario, se atenta de forma flagrante contra derechos esenciales tales como el debido proceso constitucional.

En este orden de ideas tenemos que para el caso objeto de estudio es fácilmente aplicable dicho principio cuando, por ejemplo, una persona que cuenta con la calidad de víctima, acude ante la administración de justicia y “un funcionario se niega a recibir la denuncia penal que formula alguien que, por sus convicciones religiosas, se abstiene de jurar”⁸⁶, constituyéndose así una materialización de la violación al principio del debido proceso descrita, así como en una revictimización de una persona que ya es reconocida como víctima, la cual se ve afectada por el exceso de ritualidad y formalismo en los procedimientos jurídicos estatales.

3. Economía

Al entrar a explicar este principio, es necesario referirse a dos aspectos esenciales: el de la economía desde el punto de vista de las formas propias de la acción, y desde el punto de vista de los costos en los que se incurre en determinadas acciones.

Hay que tener presente entonces que, a fin de referirse a la economía desde el aspecto de las formas, es necesario tener claro que al invertirse las reglas de procedimiento y al ser una acción que en cierto modo está provista de informalidad,

⁸⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo vs. Panamá. Serie C, núm. 72, parr. 76. (Febrero 2 del 2001). Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estatuto General de la CIDH. Resolución N.º 448. (Octubre de 1979): “Capítulo I. Disposiciones Generales. Artículo I. Naturaleza y Régimen Jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto”.

⁸⁶ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-547 de 1991. (MP Alejandro Martínez Caballero: 1991).

debe resultar económica en términos de operación, pues “no soporta inadmisiones, ni incidentes, ni nulidades tramitadas como incidentes”;⁸⁷ es decir, se ahorra una gran cantidad de actuaciones con esta acción no solo el accionante, sino también el operador judicial ante quien se tramita. Es por esta razón que, desde la óptica de la inversión de recursos no económicos, sino de gestión y actuación, resulta de fácil acceso.

Ahora bien, al referirnos al segundo aspecto en estudio (el tema de la economía desde el punto de vista de los costos), esta acción se rige por la premisa de que debe ser una acción rápida, efectiva y barata, con lo cual es posible que los costos de ejecución y operación sean casi inexistentes, pues se falla con lo que hay en el momento de interponerla, por lo que no hay lugar a grandes gastos como, por ejemplo, es el caso de los procesos usuales; al ser extraordinaria, esa condición impregna todo el proceso y, en efecto, eso se refleja también en sus costos.

Con relación a este mismo principio de economía, resulta válido traer a colación lo expresado por Devis Echandía cuando, en el marco de su dogmática del derecho procesal, afirma: “El principio de la economía procesal consiste en menor trabajo y justicia más barata y rápida”. Añade el autor que es uno de los principios fundamentales del procedimiento, ya que, según él, “debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal”.⁸⁸

4. Celeridad

Con respecto a este principio, Quinche afirma que su contenido, de forma expresa, se determina en el Inciso 1°, Artículo 4, de la ley estatutaria de la administración de justicia, tal como fue modificado por la Ley 1285 de 2009 cuando expresa con relación a la celeridad y la oralidad que,

⁸⁷ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8.

⁸⁸ Véase Hernando Devis Echandía. *TEORÍA GENERAL DEL PROCESO*. Eudeba. (2004). Pág. 66.

La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria.⁸⁹

De lo anterior resulta entonces que la interpretación bajo la cual debe ser observada esa premisa se da en el sentido de que la celeridad va directamente relacionada con la prontitud y la diligencia en el trámite y fallo de la acción de tutela; de allí que al analizar este principio y contextualizarlo al caso del beneficio que representa dicha acción para la defensa de los intereses de las personas, y en especial de la población desplazada —la cual se considerada víctima— se encuentra que al ser una acción que debe ser fallada a más tardar en un lapso de tiempo de 10 días, en primera instancia, y 20 días en segunda, se evidencian así los términos estrictos para la resolución de conflicto que deben ser resueltos en forma prioritaria mediante esta acción.

5. Eficacia

En este principio puede decirse que se constituye una concreción al principio constitucional de efectividad, el cual según Quinche se encuentra “establecido en el artículo 2 de la Carta, según el cual, uno de los fines esenciales del Estado es ‘Garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución’”.⁹⁰

⁸⁹ Véase Ley 1285 de 2009. Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. Enero 22 de 1996. DO 47240.

⁹⁰ Véase Manuel Quinche, *supra*, nota 8. De acuerdo con Constitución Política de Colombia, “son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. Véase también Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 2.

Significa lo anterior que “el Estado tiene un deber de protección respecto de los derechos. No se limita la Constitución al clásico deber de abstención, es decir, de no interferencia del Estado en los asuntos de los particulares, sino que le ordena que cuando se afecten los derechos de las personas debe intervenir para protegerlas”.⁹¹

Con relación al principio objeto de estudio encontramos que la Corte Constitucional, en múltiples fallos, establece cómo el principio de eficacia implica que el trámite de la tutela, así como su desarrollo y decisión tiene que estar encaminada a la protección real y efectiva de los derechos fundamentales del accionante.

Cuando se empieza a mover el aparato jurisdiccional en la búsqueda de la protección y el amparo de derechos fundamentales que se consideran están siendo amenazados o vulnerados, dicha respuesta debe orientarse, en el menor tiempo posible, en pro de garantizar el cese de dicha amenaza y vulneración; de ahí que en el asunto que nos ocupa, el cual es la protección del derecho al mínimo vital de la población desplazada víctima del conflicto armado colombiano, es necesario esclarecer que mediante la acción de tutela lo que se busca es la inmediata satisfacción de los derechos básicos y esenciales de esta población.

6. Informalidad

Con relación a la informalidad es posible encontrar que la Sentencia C-483 de 2008⁹² señala: “La acción de tutela no se encuentra sujeta a fórmulas sacramentales ni requisitos especiales, que puedan desnaturalizar el sentido material de protección que la propia constitución quiere brindar a los derechos fundamentales de las personas por conducto de los jueces”.

⁹¹ Véase Jorge Flórez, *supra*, nota 13.

⁹² Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-483. (Rodrigo Escobar Gil: Mayo 15 de 2008).

Significa lo anterior que, cuando sea necesario interponer la acción de tutela, basta con narrar los hechos y enunciar el derecho que se presume vulnerado o amenazado, sin que sea requisito de procedibilidad enunciar de manera taxativa la norma que ampara dicho derecho, ni la identificación del autor de dicha vulneración.

En esta acción no se requiere formalismo alguno para demandar la protección de los derechos fundamentales que se consideren están siendo vulnerados o amenazados; es por lo que, si las personas víctimas del conflicto armado estiman que se afecta su integridad, sus mínimos esenciales y sus derechos más personales, sin necesitar de algún requisito adicional pueden acudir a la autoridad competente y solicitar le sean amparados los mismos por intermedio de la acción en comento.

En lo referente a la oficiosidad, cabe señalar que la sentencia citada,

Se traduce en el papel efectivo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no solo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud del amparo, sino también en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cual es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada de tal manera que proteja de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita, si hay lugar a ella.⁹³

En el texto citado es posible observar que le corresponde al juez impulsar oficiosamente la solicitud de amparo de derechos a cuyo conocimiento se somete. Asimismo, le asiste la responsabilidad de interpretar la solicitud de protección de derechos que se demanda y buscar la solución inmediata de la petición que ante él se realiza.

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener en cuenta que en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad extrema, dado que son aquellos quienes

⁹³ *Id.*

resultaron desplazados en medio del conflicto armado interno colombiano, cuando acuden a las instancias judiciales es porque evidentemente consideran que están se desconocen o amenazan sus derechos, y es preciso entonces que el despacho encargado de atender su solicitud se desprenda de las formalidades y atienda sus casos de forma prioritaria.

I. Objetivo de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política Nacional y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, establecen como objetivo primordial la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quieran que estos resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

Es así como, el objetivo hace referencia a la razón de ser para la cual fue creada la acción, lo que da como resultado que se interprete esta como un mecanismo único en su género, capaz de brindar seguridad a la población que tiene a bien acudir a su interposición, en procura del amparo de un bien jurídico que ha sido puesto en riesgo.

J. Contenido de la acción de tutela

Si bien es cierto que esta acción es de corte informal, y que puede presentarse tanto por escrito como de forma verbal, existen unos mínimos que deben satisfacerse si se quiere que esta produzca el efecto deseado; es decir, que proteja de forma efectiva derechos vulnerados o susceptibles de ser vulnerados. De ahí que deba manifestarse, en primera medida, la acción u omisión que la motivan, es decir, la acción u omisión que viola el derecho fundamental, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública si fuese posible y, por último, el nombre y lugar de la residencia del solicitante.

Al poseer esta acción unas condiciones tan sencillas para su interposición, los desplazados víctimas del conflicto y la población colombiana, en general, encuentran

en ella un recurso accesible y viable para hacer exigibles los derechos que consideran les fueron violados; es por esto que este mecanismo se ha convertido en uno de los más utilizados en la actualidad.

La acción de tutela cuenta además con la particularidad de que puede presentarse de forma verbal, lo cual facilita su interposición a aquellas personas que no cuentan con una instrucción que les permita leer y escribir; es decir, se trata de una acción realmente incluyente, aun cuando se trate de un recurso excepcional, pues en él tienen cabida todas las personas y sirve para materializar de forma efectiva la exigencia del cumplimiento y la satisfacción inmediata de derecho por vía distinta a la litigiosa.

K. Tutela contra acción u omisión de autoridad pública

La Sentencia T-501 de 1992⁹⁴ establece:

La autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. Para el acceso a mecanismos judiciales concebidos para la defensa de los derechos fundamentales, como es el caso del derecho de amparo o recurso extraordinario en otros sistemas, o de la acción de tutela entre nosotros, por "autoridades públicas" deben entenderse todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares. Los jueces son autoridad pública, puesto que ejercen jurisdicción, es decir, administran justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución y de la Ley.

⁹⁴ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-501/92. (MP José Gregorio Hernández Galindo: agosto 21 de 1992).

En igual sentido, el artículo 123 de la Carta Política, de modo general, define quiénes son servidores públicos de la siguiente manera: "Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios".⁹⁵

El artículo 2⁹⁶ del Código Contencioso Administrativo expresa:

Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

De lo anterior se puede extraer que son autoridades los órganos, las corporaciones y las dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, las entidades descentralizadas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los contralores regionales, la Corte electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como las entidades privadas, cuando unos y otros cumplen funciones administrativas.

Quiere decir esto que cuando se habla de servidores públicos se refiere a todas las personas que laboran para el Estado, en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas, o bien por servicios; y cuando se habla de autoridades públicas, la Sentencia T-501 de 1992 reitera: "Se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados".⁹⁷

Hecha la claridad suficiente respecto al mecanismo de la acción de tutela y sus elementos esenciales, es necesario entonces que pasemos a identificar, según las leyes

⁹⁵ Véase Constitución Política de Colombia [Const]. Artículo 123.

⁹⁶ Véase Ley 1437. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Enero 18 de 2011. DO 47956. Artículo 2.

⁹⁷ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 99.

vigentes, quiénes ostentan la calidad de víctima del conflicto armado colombiano, y en consecuencia pueden hacer exigible la solicitud de asistencia humanitaria integral mediante la acción de tutela.

III. LÍNEA JURISPRUDENCIAL DESPLAZAMIENTO Y MÍNIMO VITAL

A. *Introducción*

El desarrollo de la jurisprudencia y la creación de derecho mediante esta se logra de forma lenta y progresiva, por lo cual, al realizar un análisis de varias sentencias que se relacionan entre sí, facilita el entendimiento del derecho. Con este fin es necesario identificar las sentencias más relevantes, así como construir teorías estructurales y narraciones jurídicas sólidas que permitan comprender las dinámicas de decisión al interior de la Corte.

B. *Consideraciones generales*

De acuerdo con Diego Eduardo López Medina, “una línea jurisprudencial es una idea abstracta. Para ayudar a ver la línea jurisprudencial resulta conveniente tratar de graficarla. Puesta sobre un gráfico, una línea de jurisprudencia es una pregunta o un problema jurídico bien definido”.⁹⁸

Para Felix Cohen,⁹⁹ citado por López Medina, “las sentencias particulares son significativas en el contexto de las sentencias sistemáticamente relacionadas”,¹⁰⁰ argumento que rebosa la razón toda vez que las sentencias, analizadas de manera individual, no permiten el análisis del sentido de los fallos.

La línea jurisprudencial surge de las relaciones entre providencias judiciales que pertenecen a un mismo campo decisonal en el que es posible identificar tendencias decisionales con respecto a la solución de casos prácticos. En este orden de ideas, el mismo Cohen arguye: “En las prácticas reales de los tribunales pueden encontrarse

⁹⁸ Véase Diego Eduardo López Medina. EL DERECHO DE LOS JUECES. 2ª edición. Legis. 2011.

⁹⁹ Precursor del movimiento intelectual denominado “realismo jurídico”, el cual sostenía que la teoría tradicional se había equivocado porque había adoptado un enfoque doctrinario de la jurisprudencia.

¹⁰⁰ *Id.*

uniformidades y relaciones sistemáticas”. Por lo cual se dice que las líneas jurisprudenciales pueden resolver vacíos y dar luz a la ley para sus fallos.

En materia de desplazamiento y del derecho al mínimo vital, la Corte Constitucional proporciona un cambio en el contexto social y jurídico, ligado a las tendencias internacionales proteccionistas de la dignidad humana, al derecho a la vida, la seguridad social, la vivienda y la alimentación, de modo que es necesario el estudio de la línea jurisprudencial que la Corte Constitucional deja en sus sentencias de tutela, a fin de que el operador judicial adopte esos lineamientos y enfrente aquellos asuntos que se le ponen en conocimiento a través de la acción de tutela, y así proteja de manera efectiva los derechos afectados del actor como, por ejemplo, la dignidad humana, el derecho a la salud en conexidad con la vida, la integridad de la persona y, obviamente, el mínimo vital.

Ahora bien, a fin de establecer de forma acertada una línea jurisprudencial exitosa, es necesario identificar y plantear de forma clara el problema objeto de estudio, determinar las sentencias más relevantes y fundamentarlas en pronunciamientos que marquen un tema claro que ayude a consolidar el precedente.

A continuación, se realizará un ejercicio con respecto a la ilustración de una línea jurisprudencial que establezca la relación que existe entre el mínimo vital, las ayudas, la asistencia y la atención a la población desplazada.

C. Construcción de una línea jurisprudencial

I. Metodología

El enfoque¹⁰¹ se efectúa desde la interpretación judicial y los diversos pronunciamientos en materia constitucional que se han realizado con relación al derecho al mínimo vital y su especial protección en nuestro ordenamiento jurídico, si

¹⁰¹ Para la construcción de la línea jurisprudencial se parte de las pautas que brinda Diego Eduardo López Medina en *La línea Jurisprudencial*. EL DERECHO DE LOS JUECES. 2ª edición. Legis. 2011.

se tiene en cuenta que el fundamento de esta son todos aquellos pronunciamientos de la Corte Constitucional, como, por ejemplo, las sentencias fundadoras de línea (las cuales fueron los primeros fallos que emitió la Corte), las sentencias hito consolidadoras de línea y las sentencias dominantes (en las que la Corte ha resuelto algún conflicto de interés como, por ejemplo, cuando se afectan los derechos fundamentales de las personas desplazadas y, en especial, del derecho al mínimo vital de esa población).

El desarrollo de esta línea jurisprudencial se llevará a cabo de manera retrospectiva, pero con un punto de partida inicial que toma como objeto de estudio los pronunciamientos más recientes expedidos por la autoridad competente para el caso y, en consecuencia, se tomarán varias sentencias que ayudaron a comentar las bases de la línea para su estudio estructural.

2. Objetivo

Construir la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional con respecto al derecho al mínimo vital de la población desplazada víctima del conflicto armado en Colombia, cuando dicho derecho se estima vulnerado.

3. Planteamiento del problema

¿Los desplazados víctimas del conflicto armado colombiano, a quienes se les dificulta el acceso a ayudas, asistencia y atención humanitarias, acuden a la acción de tutela contemplada en la Constitución Política Nacional como herramienta de protección efectiva del derecho al mínimo vital?

4. Identificación del punto inicial de apoyo

Luego de realizar una lectura exhaustiva de diversas jurisprudencias, se logró identificar como punto inicial de apoyo un pronunciamiento reciente contemplado en

la Sentencia T-112/05,¹⁰² mediante el cual se entrevén hechos similares a los del problema jurídico que se ha formulado para resolver el caso y encabezar la línea jurisprudencial.

En la Sentencia T-112/05 se referencian un amplio número de sentencias que permiten rastrear las tendencias decisionales entre las que se encuentran:

SU-1150 de 2000, T-911 de 2001, T-381 de 2002, T-425 de 2002, T-645 de 2003, T-025 de 2004, T-373 de 2005, T-012 de 2006, T-585 de 2006, T-508 de 2007, T-605 de 2008, T-067 de 2008, T-882 de 2009, T-690 de 2009, y T-702 de 2012, T-370 de 2013, Auto 009 de 2013, Sala de Seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y T-495 de 2014, entre otras.¹⁰³

En todas ellas, la *ratio decidendi*¹⁰⁴ dominante es que la población desplazada como sujeto de especial protección constitucional se encuentra en una situación de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad; por tanto, debe el Estado procurar que estas personas sean pronto inscritas en el registro único de población desplazada. Además, debe el Estado tramitar de forma urgente las solicitudes de asistencia y ayuda humanitaria a la que tiene derecho, pues esta debe entregarse sin dilaciones para salvaguardar el acceso al goce efectivo de derechos como el mínimo vital constitucional.

La *ratio decidendi* se considera como aquel “cúmulo de normas particulares de origen judicial que pueden ser aplicadas a casos similares por sus hechos o

¹⁰² Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-112/05. (MP Jaime Araújo Rentería: febrero 14 de 2005).

¹⁰³ *Id.*

¹⁰⁴ Razón suficiente, *ratio decidendi* o subregla. Se caracteriza porque consiste en una solución jurídica limitada por los patrones fácticos que especifica el escenario de aplicación de un principio o derecho. A pesar de que el razonamiento judicial desarrollado en la sentencia se apoye en argumentos de carácter general, la subregla hace referencia a la conclusión de la argumentación aplicada a los hechos y sirve de sustento determinante a la decisión adoptada. Se trata de la conclusión final que se extrae y permite fallar el caso concreto, de ahí la importancia de los hechos de este, pues como señala Goodhart, “el divorcio entre la conclusión y los hechos materiales sobre los que se basa dicha conclusión es ilógico, y da lugar a resultados arbitrarios e irracionales”. [Traducción propia]. Véase Arthur Goodhart. *Determining the ratio decidendi of a case*. The Yale Law Journal 40(2). Diciembre 1930. Pág. 169.

circunstancias, es decir, pueden servir para efectuar una aplicación analógica de las normas jurídicas en virtud del principio de igualdad”.¹⁰⁵

5. Análisis estructural de las citas del punto inicial de apoyo

5.1 Problema jurídico del punto de apoyo

¿La interposición de tutelas debido a la dificultad en el acceso a ayudas, asistencia y atención humanitaria, la usan los desplazados como una herramienta de protección efectiva del derecho al mínimo vital?

5.2 Punto de apoyo (PA)

Corte Constitucional de la República de Colombia, Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, MP Jorge Iván Palacio Palacio, Referencia: Expedientes acumulados: 1. T-4.598.125 acción de tutela instaurada por Jamer Alfredo Muñoz Gutiérrez; 2. T-4.574.757 acción de tutela instaurada por Mónica Alejandra Muñoz Gómez; 3. T-4.591.694 acción de tutela instaurada por Neftalí Romero Rodríguez; 4. T-4.592.333 acción de tutela interpuesta por Ana Gilma Ortiz Ortiz; 5. T-4.592.327 acción de tutela interpuesta por Orlando de Jesús Palacio Restrepo; 6. T-4.592.334 acción de tutela instaurada por Wilmar Manuel Arteaga Urango Restrepo; 7. T-4.596.741 acción de tutela interpuesta por Jaime Delgado Quintero; y 8. T-4.575.510 acción de tutela interpuesta por Luz Aida Rojas Muñoz. Todas ellas en contra de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV). Bogotá, D.C., 25 de marzo de 20015.

5.3 Hechos del punto de apoyo (PA)

De forma sintética, es posible encontrar que,

Con base en los antecedentes expuestos, pasa la Corte Constitucional a determinar si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de

¹⁰⁵ Véase Villamil. (2008).

Victimas –UARIV— vulneró los derechos fundamentales de los accionantes a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana y a la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas en situación de desplazamiento forzado, al: (i) no acceder al inscripción en el registro único de víctimas (T-4.598.125 y T-4.574.757); y (ii) negarles la entrega de la ayuda humanitaria a la que afirman tener derecho (T-4.591.694, T-4.592.333, T-4.592.327, T-4.592.334, T-4.596.741 y T-4.575.510).¹⁰⁶

5.4 Sentencias citadas en el punto de apoyo (PA)

A fin de resolver estos cuestionamientos, la Sala pasará a reiterar su jurisprudencia referente a: 1. La población desplazada como sujetos de especial protección constitucional; 2. Reglas para la inscripción de la población desplazada en el Registro Único de Víctimas; 3. El derecho fundamental de petición, en cuanto garantía de protección de las víctimas de desplazamiento forzado; 4. La ayuda humanitaria como prerrogativa mínima para la subsistencia de la población desplazada y los criterios para su prórroga; 5. La indemnización administrativa a que tiene derecho la población desplazada; y 6. Abordar el estudio de los casos concretos.

A continuación, se presenta en la tabla 1, de forma diferenciada, cuáles son las providencias citadas por su importancia según se refieran, principalmente, a hechos similares o a conceptos jurídicos llamados a incidir o clarificar la resolución del caso.

Tabla 1. *Sentencias citadas en el punto de apoyo (PA)*

Inventario de primer nivel: se incluyen aquí las sentencias citadas en la sentencia de punto de apoyo y se decantan las que refuerzan la resolución del problema jurídico planteado y las que no apuntan directamente a su resolución, con una división en dos clases.

¹⁰⁶ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-112/15. (MP Jorge Iván Palacio: marzo 25 de 2015).

Sentencias importantes	Sentencias no importantes
Sentencia T-025 de 2004	Sentencia T-076 de 2013
	Sentencia T-563 de 2005
	Sentencia T-172 de 2013
Sentencia T-328 de 2007	Sentencia T-911 de 2001
	Sentencia T-381 de 2002
	Sentencia T-425 de 2002
Sentencia T-605 de 2008	Sentencia T-508 de 2007
	Sentencia T-1076 de 2005
	Sentencia T-076 de 2013
Sentencia T-702 de 2012	Sentencia T-645 del 2006
	Sentencia C-278 de 2007
	Sentencia T-495 de 2014
	Sentencia T-012 de 2006
	Sentencia T-690 de 2009
	Sentencia T-840 de 2009
Inventario de segundo nivel: se citan en este los pronunciamientos de tres de las sentencias importantes que se eligen al azar y se establece una relación de las que soportan el problema jurídico a resolver en cada una de las sentencias que consolidan el punto de apoyo; es decir, son una especie de subcategoría o de subnivel.	
Sentencia T-025 de 2004	
Expediente T-653010	
Expediente T-775898	
Sentencia T-702 de 2012	

Expedientes acumulados T-2.545.429
Expedientes acumulados T-2.552.831
Expedientes acumulados T -2.560.833 entre otros
Sentencia T-605 de 2008
Expediente T-1815972 acumulado con los expedientes, expediente T-1819360
Expediente T-1821059
Expediente y T-1828574 entre otros

Fuente: elaboración propia

5.5 Análisis y conclusión de los hechos planteados

Al partir de la sentencia de punto de apoyo, es posible observar que el problema planteado se despeja cuando la Corte Constitucional manifiesta:

La ayuda humanitaria que ofrece el Estado a la población desplazada por la violencia, “constituye un derecho fundamental, al proteger el mínimo vital y la dignidad humana de las personas en situación de desplazamiento”. Teniendo en cuenta su finalidad protectora de los derechos fundamentales de las personas en dicha situación, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el Estado se encuentra obligado a realizar la entrega de la ayuda de manera oportuna, pronta, sin dilaciones, y en forma íntegra y efectiva.¹⁰⁷

De ahí que las sentencias citadas como importantes reafirmen la posición garantista de la decisión tomada, pues ayudan a afianzar conceptos antes emitidos y clarifican la existencia de la necesidad de satisfacción vital de la población desplazada con las ayudas humanitarias a las cuales tiene derecho.

¹⁰⁷ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 11.

Ahora bien, en el caso de las sentencias catalogadas como no importantes para resolver el problema planteado en el punto de apoyo, se tiene que son complementarias, es decir, regulan asuntos relacionados con derechos de la población desplazada,¹⁰⁸ pero no específicamente relacionados con el mínimo vital satisfecho mediante medidas de ayuda humanitaria.

El mínimo vital trae consigo una serie de derechos afines que deben ser satisfechos para que se configure una protección absoluta por parte del Estado, por lo cual:

El trascendental fallo T-025 de 2004, tantas veces citado, impuso el deber a las autoridades competentes de no permitir que las personas que han visto restringido el goce efectivo de sus derechos fundamentales por causa del desplazamiento forzado, terminen desapareciendo o continúen viviendo en condiciones atentatorias contra la dignidad humana, “a tal punto que esté en serio peligro su subsistencia física estable y carezcan de las oportunidades mínimas de actuar como seres humanos distintos y autónomos”.¹⁰⁹

A partir de ese criterio y con base en los referidos “Principios Rectores del Desplazamiento”, en dicho fallo se fijó un mínimo prestacional que debe ser satisfecho por el Estado. Entre los principios que figuran, según la misma sentencia, se encuentran el derecho a la vida, a la dignidad e integridad física, psicológica y moral, a la familia y la unidad familiar; el derecho a una subsistencia mínima, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, a la salud y a la protección; el derecho a la educación básica hasta los 15 años; en el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho al autosostenimiento, en relación con el Artículo 16 de la Constitución Política nacional; y, por último, el derecho al retorno y al restablecimiento.

¹⁰⁸ Derechos como, por ejemplo, los contenidos en el punto 4.6.1 de este trabajo investigativo.

¹⁰⁹ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-856/11. (MP Nelson Pinilla: noviembre 15 de 2001).

6. Derechos fundamentales afectados cuando no se satisfacen las necesidades básicas de los desplazados

En la tabla 2 se ilustra la estructura de los temas que se relacionan con el problema jurídico y los derechos fundamentales afectados.

Con relación a este asunto, la Corte Constitucional ha descrito los nueve derechos mínimos y básicos que la normatividad y el derecho internacional humanitario han establecido para el diseño de cualquier política o programa en la aplicación de cualquier medida concreta cuyo fin sea atender a la población desplazada.

Tabla 2. Derechos afectados y sentencias que los protegen

Derechos fundamentales afectados	Sentencias por derechos protegidos
Derecho a la vida	Sentencia T-856 de 2011
Derechos a la dignidad e integridad física, psicológica y moral	Sentencia SU-254 de 2013
Derecho a la familia y la unidad familiar	Sentencia T-328 de 2007
Derecho a una subsistencia mínima, en cuanto expresión del derecho fundamental al mínimo vital	Sentencia T-702 de 2012
Derecho a la salud	Sentencia T-206 de 2013
Derecho a la protección	Sentencia T-025 de 2004
Derecho a la educación básica hasta los 15 años, para el caso de los niños en situación de desplazamiento	Sentencia T-215 de 2002

Derecho al autosostenimiento, en relación con el artículo 16 de la Constitución Política nacional	Sentencia T-1134 de 2008
Derecho al retorno y al restablecimiento	Sentencia T-159 de 2011

Fuente: elaboración propia

6.1 Derecho a la vida: Sentencia T-856 de 2011

En este caso, se presenta una reiteración jurisprudencial que ha trazado esta Corte sobre la vulneración de derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento forzado,¹¹⁰ merecedoras de especial protección por hallarse en una situación de grave apremio y haber soportado cargas injustas, urgentes de contrarrestar para la efectiva satisfacción de sus necesidades.

En la Sentencia T-856/11 se lee:

Un Estado social de derecho debe procurar a sus habitantes los mecanismos suficientes para el disfrute de sus garantías mínimas, de manera que puedan llevar la vida en condiciones dignas. Así, la Constitución Política Colombiana, con el objetivo de lograr una efectiva protección de los derechos del conglomerado social, en especial de aquellas personas que, dadas sus condiciones físicas, psíquicas, económicas y sociales, se hallen en estado de debilidad manifiesta y de mayor vulnerabilidad estableció, en lo ahora atinente, un especial tratamiento para las víctimas de desplazamiento forzado.¹¹¹

Es así como en este caso cabe reiterar lo señalado en el fallo T-611 de agosto 13 del 2007, en el que se tuvo en cuenta la definición que se encuentra en la Ley 387 de 1997, Artículo 1, con respecto a la adopción de medidas para prevenir el desarraigo

¹¹⁰ Cf. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-285/08. (MP Nilson Pinilla Pinilla: marzo 27 de 2008).

¹¹¹ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 114.

forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica del desplazado, quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional, así como a abandonar su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o su libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.

Asimismo, en el Auto 006 de enero 26 de 2009¹¹² se expresó que del ordenamiento jurídico interno e internacional se deriva una protección reforzada para personas de la tercera edad y los discapacitados, de lo cual se desprende un conjunto de deberes en cabeza de las autoridades públicas y de los particulares, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos.

En fin, la Sentencia T-025 de 2004 impuso el deber a las autoridades competentes de no permitir que las personas que han visto restringido el goce efectivo de sus derechos fundamentales por causa del desplazamiento forzado terminen por desaparecer o vivan en condiciones atentatorias contra la dignidad humana, “a tal punto que esté en serio peligro su subsistencia física estable y carezcan de las oportunidades mínimas de actuar como seres humanos distintos y autónomos”.¹¹³

6.2 Derechos a la dignidad e integridad física, psicológica y moral: Sentencia SU-254 de 2013

Con el fin de lograr la protección efectiva del derecho a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, en atención al nuevo marco legal y reglamentario en la materia, la Corte Constitucional, mediante esta sentencia, considera que es

¹¹² Véase Corte Constitucional de Colombia. AUTO 006/09. (MP Manuel Cepeda Espinosa: enero 26 de 2009).

¹¹³ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-025/04. (MP Manuel Cepeda Espinosa: enero 22 de 2004).

necesario tener en cuenta no solo la indemnización administrativa, sino la reparación integral, y que existe una conexión intrínseca entre el derecho a la reparación integral y los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Se ha reiterado en la Sentencia SU-254 de 2013 lo siguiente:

La conexión entre los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en relación con este último ha insistido en que (i) las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario o de crímenes de lesa humanidad tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, proporcional, integral y eficaz respecto del daño sufrido; (ii) la reparación se concreta a través de la restitución íntegra o plena, pero también a través de la indemnización, de la rehabilitación, de la satisfacción de alcance colectivo, y de la garantía de no repetición; (iii) la reparación a las víctimas por el daño ocasionado se refiere tanto a los daños materiales como a los inmateriales, (iv) la reparación se concreta a través de medidas tanto individuales como colectivas, y que (v) estas medidas se encuentran encaminadas a restablecer a la víctima en su dignidad por el grave daño ocasionado.¹¹⁴

De ahí que, en cuanto a la reparación por la vía administrativa para población desplazada, esta Corte se ha pronunciado de igual forma en diversa jurisprudencia.¹¹⁵

Asimismo, señala:

En relación con las diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de delitos en general, así como de graves violaciones a los derechos humanos y del desplazamiento forzado en particular, puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.

¹¹⁴ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-254/13. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: abril 24 de 2013).

¹¹⁵ *Eg.* SENTENCIA T-417 de 2006; T-222 de 2008; T-085 de 2009; T-190 de 2009; T-299 de 2009; T-617 de 2009; y T-458 de 2010. En estas la Corte se pronunció sobre la aplicación del ahora derogado Decreto 1290 de 2008, y el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991.

Estas diferentes vías de reparación a víctimas presentan diferencias importantes: (i) la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento de justicia a personas individualmente consideradas, examinando caso por caso las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción de los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima.

(ii) Mientras que por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por buscar una reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes componentes o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio de equidad, en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación plena del daño, ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión, proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que facilita el acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son rápidos y económicos y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de complementariedad entre ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación integral, adecuada y proporcional a las víctimas.¹¹⁶

De esta manera, en cuanto a la reparación por la vía judicial, cabe mencionar que en el sistema jurídico colombiano se puede dar mediante proceso penal ordinario, mediante un incidente de reparación o a través del proceso penal previsto por la justicia transicional, de conformidad con la Ley 975 de 2005, la cual estableció dentro de los procesos penales llevados dentro de la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz

¹¹⁶ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 119. Cf. Pablo de Greiff. *Justice and Reparations*. THE HANDBOOK OF REPARATIONS. Oxford Scholarship. 2006. Pág. 454; cf. también Jaime Bolívar y Aura Patricia. *Mecanismos de Reparación en perspectiva comparada*. En Catalina Díaz, Nelson Sánchez y Rodrigo Uprimny (eds.). REPARAR EN COLOMBIA: LOS DILEMAS EN CONTEXTOS DE CONFLICTO, POBREZA Y EXCLUSIÓN. Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. 2009. Pág. 76.

la posibilidad de iniciar un incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal.¹¹⁷

Ahora bien, la Corte Constitucional estableció que el Estado tiene la obligación de facilitar el acceso de los accionantes a la reparación tanto por vía judicial como por vía administrativa. En virtud de esto, las entidades encargadas no pueden imponer requisitos o condiciones que impliquen para las víctimas una carga desproporcionada, porque no puedan cumplirlos¹¹⁸, porque su realización desconozca la especial protección constitucional a la que tienen derecho, o bien porque se vulnere su dignidad¹¹⁹ o los revictimice.

Por tanto, cabe destacar que la protección de estos derechos en particular goza de amparo legal y jurisprudencial en el Estado, y que en esta sentencia simplemente se reafirman los criterios expresados con anterioridad y se referencian esos pronunciamientos que se expidieron con base en la integralidad del ser y en el daño no solo físico, sino psicológico, moral, económico y, por ende, jurídico, de bienes materiales e inmateriales, a partir del respeto por la dignidad humana, y la especial condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada en Colombia.

6.3 Derecho a la familia y la unidad familiar: Sentencia T-328 de 2007

El Estado debe apoyar la reunificación y la estabilización socioeconómica del hogar víctima de desplazamiento. En virtud de esto, cabe resaltar en este punto que,

Tanto la Ley 387 de 1997 como la jurisprudencia de la Corte Constitucional fundada en el bloque de constitucionalidad, han reconocido el derecho de

¹¹⁷ Cf. Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Julio 25 de 2005. DO 45980. Artículo 23.

¹¹⁸ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-188/07. (MP Álvaro Tafur Galvis: marzo 15 de 2007).

¹¹⁹ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-239/13. (MP María Victoria Calle Correa: abril 19 de 2013).

quienes integran un núcleo familiar afectado por el desplazamiento, a mantener la unidad del núcleo. Para ello es necesario que el Estado apoye vigorosamente la reunificación y la estabilización socioeconómica del hogar víctima de desplazamiento.¹²⁰

Al respecto, en la Sentencia T-025/04 señala:

Entre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzado, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes: (...) 6. En no pocos casos, el desplazamiento implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus miembros a la unidad familiar¹²¹ y a la protección integral de la familia.¹²² Los Principios 16 y 17 están dirigidos, entre otras cosas, a precisar el alcance del derecho a la reunificación familiar. (...) A partir de ese criterio, y con base en las obligaciones internacionales asumidas por Colombia en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como en la compilación de criterios para la interpretación y aplicación de medidas para atender a la población desplazada contenida en los Principios Rectores, la Sala considera que los siguientes derechos mínimos encuadran bajo esta definición y, por ende, integran el mínimo prestacional que siempre debe ser satisfecho por el Estado: (...) 3. El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 CP y precisado para estos casos en el Principio 17, especialmente, aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional como niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia, quienes tienen derecho a reencontrarse con sus familiares.¹²³

¹²⁰ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-328/07. (MP Jaime Córdoba Triviño: mayo 4 de 2007).

¹²¹ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-1150/00. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: agosto 30 del 2000).

¹²² Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-1635/00. (MP José Gregorio Hernández Galindo: 27 de noviembre del 2000).

¹²³ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 118.

De ahí que a falta de apoyo del Estado se viole el derecho a la unidad familiar, por lo cual la Corte Constitucional señaló:

Estos derechos han sido desarrollados por la ley y conforman una carta de derechos básicos de toda persona que ha sido víctima de desplazamiento forzado interno. Así, a cada desplazado se le informará que:

1. Tiene derecho a ser registrado como desplazado, solo o con su núcleo familiar.
2. Conserva todos sus derechos fundamentales y por el hecho del desplazamiento no ha perdido ninguno de sus derechos constitucionales, sino que por el contrario es sujeto de especial protección por el Estado;
3. Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria inmediatamente se produzca el desplazamiento y por el término de 3 meses, prorrogables por 3 meses más¹²⁴ y que tal ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestido adecuado, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.
4. Tiene derecho a que se le entregue el documento que lo acredita como inscrito en una entidad promotora de salud, a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud;

¹²⁴ En virtud de la Sentencia C-278 de 2007 “el término de tres (3) meses de la ayuda humanitaria de emergencia previsto en el parágrafo 15 de la Ley 387 de 1997 resulta demasiado rígido para atender de manera efectiva a la población desplazada y no responde a la realidad de la permanente vulneración de sus derechos. Para la Corte, el establecimiento de un término para dicha asistencia no se opone por sí mismo a la Constitución. Sin embargo, como lo demuestra la experiencia, dicha ayuda no puede depender del simple paso del tiempo, sino que debe tener en cuenta las condiciones objetivas de la población afectada a la que se debe brindar asistencia, para que sea realmente efectiva y cumpla a cabalidad con la responsabilidad que le compete al Estado en relación con los afectados. Por tales razones, la Corte determinó que el término de tres meses y su prórroga por el mismo tiempo son inconstitucionales, pues resultan notoriamente insuficientes en la gran mayoría de situaciones para subsanar y atender en forma eficiente y oportuna, la grave vulneración de múltiples derechos fundamentales de la población desplazada. Al desaparecer estos términos, la Corporación precisó que la asistencia humanitaria de emergencia debe extenderse hasta que la persona afectada pueda asumir su auto sostenimiento. En este sentido, se condicionó la exequibilidad del resto del parágrafo acusado. Por otro lado, la Corte declaró inexecutable el parágrafo del artículo 18 de la Ley 387 de 1997, toda vez que es claro que la responsabilidad de mejoramiento y restablecimiento de los derechos conculcados a la población desplazada es responsabilidad del Estado, de manera que el legislador no puede imponerle a los afectados una obligación como la establecida en dicho parágrafo que ordena de manera perentoria a estas personas cooperar en ese restablecimiento. La Corte aclaró que esto no obsta para que estas comunidades puedan colaborar por su propia iniciativa”.

5. Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional;

6. Tiene derecho a que se identifiquen, con su plena participación, las circunstancias específicas de su situación personal y familiar para definir, mientras no retorne a su lugar de origen, cómo puede trabajar con miras a generar ingresos que le permitan vivir digna y autónomamente.

7. Tiene derecho, si es menor de 15 años, a acceder a un cupo en un establecimiento educativo.

8. Estos derechos deben ser inmediatamente respetados por las autoridades administrativas competentes, sin que éstas puedan establecer como condición para otorgarle dichos beneficios que interponga acciones de tutela, aunque está en libertad para hacerlo;

9. Como víctima de un delito, tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por esa condición para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación.

Si bien esta carta de derechos del desplazado no implica que sus demás derechos puedan ser desconocidos, ni que el desplazado obtenga, por conocer dicha carta, una protección automática de sus derechos básicos sí garantiza, por lo menos, que se le provea información oportuna y completa sobre los deberes de las autoridades y respecto de la especial protección que ha de recibir por el hecho del desplazamiento.¹²⁵

La Corte Constitucional ha otorgado especial protección a este derecho, con el propósito de no generar otro tipo de alteraciones en la población desplazada por la violencia y garantizar así la satisfacción de sus derechos fundamentales.

¹²⁵ *Id.*

6.4 Derecho a una subsistencia mínima, como expresión del derecho fundamental al mínimo vital:

Sentencia T-702 de 2012

Esta Sentencia establece que la ayuda humanitaria constituye derecho fundamental al proteger el mínimo vital y la dignidad humana de personas en situación de desplazamiento, y se configura como una garantía mínima para la subsistencia de población desplazada; en ella se reconocen componentes y prestaciones en servicios básicos que garantizan el mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas de las víctimas de desplazamiento forzado.

La Corte Constitucional, en esta oportunidad, debe decidir si a los accionantes dentro de los presentes procesos de revisión de constitucionalidad, en su calidad de víctimas de desplazamiento forzado, les han sido vulnerados sus derechos fundamentales asociados al cumplimiento de la ayuda humanitaria, en sus diferentes componentes, etapas y fases, su entrega efectiva, sus términos y sus prórrogas, así como la garantía del tránsito hacia soluciones duraderas de estabilización socioeconómica. Por tanto, a fin de resolver el problema jurídico manifiesta que, de acuerdo con el carácter estructural y la magnitud del desplazamiento forzado, en cuanto una grave, masiva y sistemática violación de los derechos fundamentales de las víctimas, se declaró el estado de cosas inconstitucional, lo cual “contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidos en el Texto Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”.¹²⁶

Es por eso que reitera la Corte Constitucional en la Sentencia T-025/04 que el otorgamiento por parte de las autoridades competentes de la ayuda humanitaria y su prórroga, cuando hay lugar a ello, hace parte del “derecho a una subsistencia mínima”,¹²⁷ el cual a su vez es expresión directa del derecho fundamental al mínimo

¹²⁶ Véase Corte Constitucional de Colombia SENTENCIA T-215. (MP Jaime Córdoba Triviño: marzo 21 de 2002). Cf. SENTENCIA T-136 de 2007. (MP Jaime Córdoba Triviño: febrero 27 de 2007).

¹²⁷ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 118.

vital. De esta manera, la ayuda humanitaria tiene como fin constitucional brindarle a la población desplazada asistencia para satisfacer sus necesidades básicas de “alimentación, salud, atención psicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública”,¹²⁸ y, en consecuencia, abarca “tanto la ayuda humanitaria de emergencia que se presta desde el momento en que ocurre el desplazamiento, como los componentes de asistencia mínima durante las etapas de restablecimiento económico y de retorno”.¹²⁹ Con esto se proporciona una respuesta adecuada a la protección del derecho al mínimo vital en materia de desplazamiento se refiere.

6.5 Derecho a la salud: Sentencia T-206 de 2013

Esta Sentencia se refiere a aspectos muy relevantes como, por ejemplo, la fundamentalidad del derecho a la salud, y manifiesta:

Se hace efectiva a partir del cumplimiento de los principios de continuidad, integralidad y la garantía de acceso a los servicios, entre otros. Con base en ello, está constitucionalmente prohibido, salvo las excepciones previstas en la sentencia C-800 de 2003, que una entidad abandone el tratamiento al que se somete a una persona, su evolución diagnóstica y la búsqueda de alternativas para confrontar la enfermedad.¹³⁰

En este fallo, el problema jurídico se plantea dos interrogantes. El primero se refiere a si se vulnera el derecho a la salud y la vida digna de una persona menor al no suministrarle los gastos de transporte y alojamiento necesarios para que pueda desplazarse y así acceder a los servicios que requiere; el segundo a si una entidad promotora de salud vulnera los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de una persona al no autorizar ni suministrar una prestación incluida en el plan de

¹²⁸ Decreto 2569 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Diciembre 12 de 2000. DO 44263. Artículo 20.

¹²⁹ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 118.

¹³⁰ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-206 de 2013. (MP Jorge Iván Palacio Palacio: abril 15 de 2013).

beneficios formulada por su médico tratante, y la cual el paciente requiere con necesidad.

De ahí que a fin de resolver esos interrogantes fue necesario que la Corte Constitucional se manifestara con relación a los siguientes temas:

i. flexibilización del juicio de procedibilidad de la acción en materia de derecho a la salud; ii. la fundamentalidad del derecho a la salud y los principios que la inspiran; iii. el derecho a la salud de los niños y las niñas; iv. la cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad en salud; v. el financiamiento de los gastos de traslados y hospedaje para el paciente y su acompañante; vi. carencia actual de objeto por hecho superado.¹³¹

Esta sentencia expresa también que el derecho a la salud, por su relación y conexión directa con la dignidad humana, es instrumento para la materialización del Estado social de derecho y, por tanto, ostenta la categoría de fundamental mediante Sentencia T-859 de 2003.¹³²

Además, la Corte Constitucional ha precisado que la protección del derecho mediante la acción de tutela se limita,

Argumentando la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad, la ley, la jurisprudencia y los planes obligatorios de salud, con la necesidad de proteger una vida en condiciones dignas, sin importar cuál sea la persona que lo requiera.¹³³

Actualmente, se reconoce que el derecho a la salud tiene el carácter de fundamental, posición asumida claramente en la Sentencia T-760 de 2008. En esta

¹³¹ *Id.*

¹³² Esta decisión ha sido reiterada, entre otras, en las Sentencias T-060 de 2007, T-148 de 2007, y T-760 de 2008, entre otras.

¹³³ *Eg.* Sentencia T-201 de 2009, y T-654 de 2010, entre otras.

se expuso lo siguiente: “Se garantiza pues, que el servicio de salud no sea interrumpido, súbitamente, antes de la recuperación o estabilización del paciente”.¹³⁴

Manifiesta también la Sentencia T-206 de 2013 que el principio de integralidad funge como complemento a la normatividad vigente para que la persona reciba una atención de calidad y completa, confinada a mejorar su condición y su estado de salud.¹³⁵ Los afiliados tienen derecho a que la prestación del servicio sea óptima, en el sentido de que los actores del sistema cumplan con la finalidad primordial de este, es decir, brindar una atención oportuna, eficiente y de calidad. En conclusión, “el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud”.¹³⁶

Ahora bien, la Corte Constitucional sostiene cómo, “aunque el transporte y el hospedaje del paciente y su acompañante no constituyen servicios médicos, hay ciertos casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención”.¹³⁷

¹³⁴ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-059 de 2007. (MP Álvaro Tafur Galvis: febrero 1 de 2007). En este caso, la Corte Constitucional tuteló el derecho de un joven de 23 años a que no se interrumpiera el tratamiento que recibía por un problema de adicción que lo llevó a perder su cupo como estudiante, a pesar de que se le atendía en condición de beneficiario de su padre, por ser estudiante.

¹³⁵ Cf. SENTENCIA T-073 de 2012: “En síntesis, el principio de integralidad, tal y como ha sido expuesto, comprende dos elementos: ‘(i) garantizar la continuidad en la prestación del servicio y (ii) evitar a los accionantes la interposición de nuevas acciones de tutela por cada nuevo servicio que sea prescrito por los médicos adscritos a la entidad, con ocasión de la misma patología’. De igual modo, se dice que la prestación del servicio en salud debe ser:

-Oportuna: indica que el usuario debe gozar de la prestación del servicio en el momento que corresponde para recuperar su salud, sin sufrir mayores dolores y deterioros. Esta característica incluye el derecho al diagnóstico del paciente, el cual es necesario para establecer un dictamen exacto de la enfermedad que padece el usuario, de manera que permita que se brinde el tratamiento adecuado.

-Eficiente: implica que los trámites administrativos a los que está sujeto el paciente sean razonables, no demoren excesivamente el acceso y no impongan al interesado una carga que no le corresponde asumir.

-De calidad: esto quiere decir que los tratamientos, medicamentos, cirugías, procedimientos y demás prestaciones en salud requeridas contribuya, a la mejora de las condiciones de vida de los pacientes”.

¹³⁶ Véase Observación General N.º 14 (2000). ‘El derecho del más alto nivel posible de salud’.

¹³⁷ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-760 de 2008. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: julio 31 de 2008).

Este tribunal ha considerado que, a partir del principio de solidaridad sobre el que descansa el derecho a la seguridad social, cuando un usuario del sistema de salud es remitido a un lugar diferente al de su residencia para recibir la atención médica prescrita por su galeno tratante, en razón a que su EPS no cuenta con disponibilidad de servicios en el lugar de afiliación, los gastos que se originen por el transporte y la estadía deben ser asumidos por el paciente o su familia.¹³⁸

6.6 Derecho a la protección: Sentencia T-025 de 2004

La sentencia que a continuación se explica se ha erigido en hito dentro del Estado colombiano, pues en ella se configura el estado de cosas inconstitucionales de la población desplazada, de modo que compila una gran variedad de temas, entre los que se destacan las condiciones para que las asociaciones de desplazados interpongan la acción de tutela, su alcance y sus causales, la vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales de la población desplazada, el derecho a recibir de forma urgente un trato preferente, el derecho a que se cumplan las órdenes proferidas por la Corte Constitucional para su protección, la vulneración de derechos persistente en el tiempo y la falla por parte de las autoridades competentes que no han adoptado los correctivos para su protección, el análisis de los resultados de la política pública de atención a la población desplazada y la problemática de la capacidad institucional del Estado para su protección. Asimismo, insuficiencia de recursos para la implementación de políticas de atención a la población desplazada, y los momentos en los que opera el principio de legalidad del gasto público y la asignación de recursos para la protección de derechos fundamentales de la población desplazada. También se abordaron mediante este fallo temas referentes a los correctivos que deben cumplirse para una suficiente apropiación presupuestal y la colaboración armónica que debe darse entre las ramas del poder público para su protección, la evolución jurisdiccional,

¹³⁸ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-741 de 2007. (MP Marco Gerardo Monroy Cabra: septiembre 20 de 2007).

los factores que lo determinan, los elementos y la declaración formal del estado de cosas inconstitucionales.

Así, la Sentencia T-025/04 señala:

Las autoridades están obligadas —por los medios que estimen conducentes— a corregir las visibles desigualdades sociales, a facilitar la inclusión y participación de sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida económica y social de la nación, y a estimular un mejoramiento progresivo de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de la sociedad.¹³⁹

Este controversial fallo explica:

Se derivan dos clases de deberes para el Estado. Por una parte, debe adoptar e implementar las políticas, programas o medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados y al hacerlo, dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de satisfacción progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales básicos de la población, en aplicación de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado “cláusula de erradicación de las injusticias presentes. Y, por otra, debe abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a agravar la situación de injusticia, de exclusión o de marginación que se pretende corregir, sin que ello impida avanzar gradual y progresivamente hacia el pleno goce de tales derechos.¹⁴⁰

Ahora bien, ante la magnitud del problema del desplazamiento y su grave incidencia en la protección de los derechos de los desplazados, la Corte Constitucional, con esta Sentencia, se pregunta si procede declarar un estado de cosas inconstitucionales, y procede a explicarlo así:

¹³⁹ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 118.

¹⁴⁰ *Id.*

Se está ante un estado de cosas inconstitucional cuando “(1) se presenta una repetida violación de derechos fundamentales de muchas personas —que pueden entonces recurrir a la acción de tutela para obtener la defensa de sus derechos y colmar así los despachos judiciales— y (2) cuando la causa de esa vulneración no es imputable únicamente a la autoridad demandada, sino que reposa en factores estructurales”.¹⁴¹

Por último, cabe señalar que en la Sentencia se explica lo siguiente:

La Corte ha declarado en siete ocasiones la existencia de un estado de cosas inconstitucional. La primera vez, lo hizo ante la omisión de dos municipios en afiliar a los docentes a su cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían los descuentos para pensiones y prestaciones sociales previstos en la ley.¹⁴² Con posterioridad a esta sentencia, la Corte ha declarado un estado de cosas inconstitucional en seis ocasiones más: 1) por la situación de violación continua de los derechos de sindicados y procesados detenidos en las distintas cárceles del país;¹⁴³ 2) debido a la falta de un sistema de seguridad social en salud para los sindicados y reclusos;¹⁴⁴ 3) por la mora habitual en el pago de mesadas pensionales, durante un período prolongado de tiempo, en los departamentos del Bolívar¹⁴⁵ y 4) de Chocó;¹⁴⁶ 5) por omisiones en la protección de la vida de

¹⁴¹ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-090/00. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: febrero 2 de 2000).

¹⁴² Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-559/97. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: 1997).

¹⁴³ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-153. (MP Eduardo Cifuentes: 1998).

¹⁴⁴ Cf. Corte Constitucional SENTENCIA T-606 y SENTENCIA T-607 de 1998. (MP José Gregorio Hernández Galindo).

¹⁴⁵ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-525/99. (MP Carlos Gaviria Díaz: julio 23 de 1999).

¹⁴⁶ Cf. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-090/00. (MP Alejandro Martínez Caballero: febrero 2 de 2000).

defensores de derechos humanos¹⁴⁷ y 6) por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos para el nombramiento de notarios.¹⁴⁸

De ahí que el fallo objeto de estudio, frente a violaciones masivas de derechos constitucionales, una vez constatado el estado de cosas inconstitucional, señala:

La Corte ha extendido los efectos de la tutela para ordenar remedios que tengan un alcance material y temporal acorde con la magnitud de la violación y para proteger, en aras del principio de igualdad, los derechos de quienes se encuentran en una situación similar a la demandada, pero no acudieron a la acción de tutela.¹⁴⁹

Así, entonces, se observa de forma clara el esfuerzo que ha realizado el máximo órgano constitucional por salvaguardar y proteger los derechos de la población desplazada en Colombia.

¹⁴⁷ Cf. Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-590 de 1998. (MP Alejandro Martínez Caballero: octubre 20 de 1998). En este caso, el estado de cosas inconstitucional se presentó por la omisión del Estado de adoptar medidas para garantizar los derechos de los defensores de derechos humanos frente a las amenazas permanentes contra la vida de estas personas. La Corte, luego de resaltar los atentados y asesinatos cometidos contra miembros de diversas ONG de derechos humanos y realizar un recuento del contenido de las circulares presidenciales emitidas para lograr el trabajo coordinado de las distintas entidades, señala que “pese a las circulares presidenciales, el ataque a los defensores de derechos humanos ha continuado (...) y hay conductas omisivas del Estado en cuanto a su protección, máxime cuando se ha puesto en conocimiento de éste el clima de amenazas contra dichos activistas. Esta es una situación abiertamente inconstitucional, a la cual el juez constitucional no puede ser indiferente”.

¹⁴⁸ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-250/98. (MP Alejandro Martínez Caballero: mayo 28 de 1998); véase *también* SENTENCIA T-1695/00. (MP Marta Victoria Sáchica Méndez: diciembre 7 de 2000). En cuanto a la falta de convocatoria a un concurso de méritos para el nombramiento de notarios, constatado el estado de cosas inconstitucional en 1998, la Corte ordenó al Superintendente de Notariado y Registro y al Consejo Superior de la Administración de Justicia, que, en el término de seis meses, contados a partir de la notificación de la Sentencia, convocara los concursos abiertos para notarios. Luego, en el 2000, constatada la continuidad del estado de cosas inconstitucional, la Corte ordenó “al Consejo Superior de la Carrera Notarial, en cabeza de su presidente, el Ministro de Justicia y del Derecho, para que a más tardar en un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la notificación de este fallo, se modifiquen y rehagan las bases del concurso convocado por el Consejo Superior en el Acuerdo 1 de 1998, para la provisión del cargo de notario público en propiedad en todo el territorio nacional, que permita poner fin de una vez por todas al mencionado estado de cosas inconstitucional. Para tal efecto, el órgano encargado de administrar la carrera notarial ha de dar estricto cumplimiento no sólo a la Ley 588 de 2000 sino a las sentencias de esta Corporación, en especial a los fallos C-741 de 1998; C-153 de 1999, C-155 de 1999 y C-647 de 2000, que son de obligatorio cumplimiento”.

¹⁴⁹ Véase Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-025/04 (MP Manuel José Cepeda Espinosa: enero 22 de 2004)

6.7 Derecho a la educación básica hasta los 15 años, para el caso de los niños en situación de desplazamiento: Sentencia T-215 de 2002

Esta sentencia manifiesta que a los desplazados no se les puede negar el ingreso a establecimientos educativos por haber superado la edad límite para los años escolares a los que aspiran.

Asimismo, pone de presente que cuando se trata del derecho a la educación de los niños, la edad es un factor insuficiente para negar su ingreso a un centro educativo pues, como tuvo oportunidad de manifestarlo la Corte,

Una cosa es que el cabal desarrollo de los menores esté relacionado con la realización de las condiciones que más lo favorezcan, y otra muy distinta que la uniformidad de los estudiantes sea una de esas condiciones ideales; frente a la posible existencia de teorías que así lo afirmen, se puede oponer que hay teorías que critican como perjudicial una normalización artificial del entorno social de los estudiantes; de esta manera, la opción realizada por las entidades demandadas entre unas y otras teorías psicológicas y pedagógicas resulta gratuita, académicamente infundada, e insuficiente para justificar el rechazo que se le impuso a la hija menor de la actora. (...) La separación por edades de los estudiantes que conviven en la misma aula, es contraria a la práctica escolar colombiana y a la de muchos otros países en los que no se cuenta con abundancia de docentes y de medios físicos y económicos para lograr la universalización de la educación básica; en éste y en otros países, desde hace muchos años se viene acudiendo a la práctica de optimizar el rendimiento del trabajo de un solo docente, reuniendo en el mismo salón de clase a estudiantes de diversos grados académicos, a los que el mismo maestro educa sin segregarlos espacialmente.¹⁵⁰

De este modo, el hecho de que los niños hayan superado la edad límite establecida para acceder a un grado escolar no es razón suficiente para negar su

¹⁵⁰ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-789 de 2000. (MP Carlos Gaviria Díaz: junio 28 de 2000).

ingreso a un colegio determinado, ni mucho menos al sistema educativo. Es más, tratándose de niños desplazados por el conflicto interno, obligados a trasladarse de un lugar a otro, a iniciar su año lectivo y luego a suspenderlo para, si es posible, reiniciarlo en otro centro educativo, es normal que sobrepasen la edad en la que ordinariamente se accede a los grados escolares. Por tanto, la superación de esos límites temporales no tiene por qué conllevar su exclusión del sistema educativo.¹⁵¹

6.8 Derecho al autosostenimiento, en relación con el Artículo 16 de la Constitución Política Nacional: Sentencia T-1134 de 2008

El fallo aducido cita la Sentencia T-025 de 2004. Reconoce unos mínimos que deben ser satisfechos, en primera medida, cuando de población desplazada por la violencia se trate, y señala:

En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (artículo 16 C.P.) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento —obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los Principios Rectores, en especial de los Principios 1, 3, 4, 11 y 18. (...) [El] deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar, su proveniencia inmediata, sus necesidades particulares, sus habilidades y conocimientos, y las posibles alternativas de subsistencia digna y autónoma a las que puede acceder en el corto y mediano plazo, con miras a definir sus posibilidades concretas para poner en marcha un proyecto razonable de estabilización económica individual, de participar en forma productiva en un proyecto colectivo, o de vincularse al mercado laboral, así como emplear la información que provee la población desplazada para identificar alternativas de generación de ingresos por parte de los desplazados.¹⁵²

¹⁵¹ Véase Corte Constitucional de Colombia, *supra*, nota 131.

¹⁵² Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-1134 de 2008. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: 14 noviembre de 2008).

6.9 Derecho al retorno y al restablecimiento: Sentencia T-159 de 2011 y Sentencia C-715 de 2012

El problema jurídico que plantea la primera Sentencia en comentario es el siguiente:

Con fundamento en la situación fáctica y las decisiones tomadas por el juez de única instancia le corresponde a esta Sala Octava de Revisión establecer si el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural al no dar una respuesta clara y concisa respecto de la solicitud realizada por el accionante en la que solicita la autorización para la venta del inmueble adjudicado y abandonado por desplazamiento forzado o permitir su reubicación en otro de iguales o superiores condiciones ha vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a la vivienda digna y al mínimo vital.¹⁵³

Ahora bien, la restitución es un componente esencial del Estado social del derecho, por lo que el tratamiento a las víctimas del delito de desplazamiento forzado debe buscar el restablecimiento de sus bienes patrimoniales, lo cual debe a su vez enmarcarse dentro de lo previsto en los “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos”, los “Principios sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas”.¹⁵⁴

A fin de tratar de darle solución al caso específico, la Corte Constitucional ha establecido con relación al derecho al retorno y a la reubicación de la población desplazada lo siguiente:

La respuesta a la problemática del desplazamiento no solamente fue desde el ámbito nacional, sino que también se buscó ampliar la protección a la esfera internacional, por lo que fue necesario adoptar diferentes instrumentos de carácter internacional que igualmente reconocieron la protección a los derechos de reubicación y restitución de la tierra para los desplazados como una alternativa óptima de estabilización socioeconómica. Dentro de las decisiones adoptadas se encuentran los Principios Rectores de los

¹⁵³ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-159/11. (MP Humberto Sierra Porto: marzo 10 de 2011).

¹⁵⁴ Esta posición la plantea el magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto en la exposición de motivos de la Sentencia T-159 de 2011, *id.*

Desplazamientos Internos, formulados en 1998 por el representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en la medida que concretan el alcance de tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario respecto de los desplazados internos. En relación con los derechos al retorno y la reubicación de la población desplazada, resulta pertinente la aplicación de los Principios 18, 28 y 29 que precisan las pautas de comportamiento que deben seguir las autoridades al diseñar, implementar y ejecutar medidas y programas orientados a asegurar el goce efectivo de estos derechos a la población desplazada.¹⁵⁵

7. ¿Cómo garantiza la Corte Constitucional el derecho al mínimo vital de las personas desplazadas?

Mediante diferentes sentencias, la Corte constitucional ha manifestado la protección de derechos de la población desplazada que deben surtirse como requisito para garantizar el goce efectivo del derecho al mínimo vital y una subsistencia digna en virtud de la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esta población.

En la tabla 3 se ilustran dichas garantías.

Tabla 3. Protección del derecho al mínimo vital de la población desplazada

Protección del derecho al mínimo vital de la población desplazada					
Radicado de la sentencia	Derecho	Magistrado ponente	Demandante y demandado	Temas	Postura jurídica relevante
T-025/04	Derechos de los desplazados-	Manuel José Cepeda Espinosa	Abel Antonio Jaramillo, Adela Polanía Montaña, Agripina María	Vulneración múltiple, masiva y continua de	Declaración del estado de cosas inconstitucionales y medidas de prevención y mitigación de este.

¹⁵⁵ Véase Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-715 de 2012. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: septiembre 13 de 2012).

	derecho a la protección		Núñez y otros contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Inurbe, el Incora, el SENA, y otros.	derechos fundamentales	
T-919/06	Derechos del desplazado, vulneración múltiple, masiva y continua de derechos fundamentales- derecho a la unidad familiar	Manuel José Cepeda Espinosa	Alisandro Solano Díaz, en representación de sus hijos Andrea Camila, Johan Steven y Mérida Alexandra Solano Andrade, en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.	Deber de solidaridad del Estado-frente a menor de edad desplazada sujeto de especial protección por ser portadora de VIH, unidad familiar y vivienda digna.	Decide la Corte tutelar el derecho del peticionario y los miembros de su núcleo familiar, en cuanto sujetos de protección constitucional reforzada, a acceder a una vivienda digna, en conexidad con su derecho al mínimo vital.

T-771/07	Derecho al auto Sostenimiento o la libertad de asociación	Humberto Antonio Sierra Porto	Jhon Jaiber Pallares Rincón y otros contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Territorial Cesar	Derecho a la libertad de asociación, derecho a la autodeterminación informática y derecho al hábeas data.	Le tutela de sus derechos fundamentales al hábeas data y de libre asociación en virtud de su condición especial de desplazados, y ordena además a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, Territorial Cesar, que, si no lo ha hecho aún, dentro del término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, expida las certificaciones que acrediten la condición de desplazamiento forzado en que se encuentran los accionantes.
T-1134/08	Derecho a la educación básica hasta los 15 años, para el caso de los niños en situación de desplazamiento-mínimo vital	Manuel José Cepeda Espinosa	Guillermina Castro Morales, Margarita Londoño Ruiz, y Claudia Yaned Villa Restrepo contra Acción Social	Derechos a la salud, a la seguridad social, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, al trabajo, a la alimentación, a la educación y a los derechos de los niños, en el marco de la jurisprudencia constitucional sobre los derechos	Se ordena una entrega completa de los componentes de la prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia previstos en la ley (alimentación básica, apoyo para alojamiento, implementos de habitación, cocina y aseo y vestuario adecuado), en cantidad y calidad suficiente para suplir temporalmente las necesidades y se ordena incluir a los niños y la accionante en el programa de apoyo educativo para las mujeres

				de las personas víctimas del desplazamiento forzado interno	desplazadas mayores de 15 años.
T-044/10	Derecho a una vivienda digna	María Victoria Calle Correa	Camilo Antonio Sánchez contra Acción Social, Ana Felicia Muñoz Cortés contra Acción Social, John Jaime Chica Ríos contra Acción Social, Eduardo Jiménez Villa contra Acción Social y el Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda, Amparo de Jesús Naranjo Ciro contra Acción Social y el Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda, y la Asociación de Desplazados de la Costa Pacífica residentes en Cali y otros-ASOCCPRC contra Acción Social.	Inscripción en el registro único de desplazados, subsidio de vivienda para la población desplazada, prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia para la población desplazada y atención humanitaria de emergencia	Se destaca en esta Sentencia que se ordena a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción Social, que los inscriban a él y a su núcleo familiar de manera inmediata en el Registro Único de Población Desplazada y, consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de Desplazados. Además, le ordenará que realice todas las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de ocho días, contados a partir de la notificación de la sentencia, y ordena al Fondo de Vivienda Nacional-Fonvivienda que incluya al peticionario Eduardo Jiménez Villa en la lista de aspirantes al subsidio de adquisición de vivienda nueva o usada para la población desplazada, y le asigne un subsidio de vivienda familiar con arreglo a los criterios de prelación establecidos en la ley y en los

					reglamentos correspondientes, en virtual de su especial condición de desplazado.
T-282/11	Derecho a la vivienda digna	Luis Ernesto Vargas Silva	Chilo Valencia, en nombre propio y en representación de su esposa, Reveca Esneda; y Elvia Guatoro, en nombre propio y en representación de sus hijos contra la Inspección urbana de policía municipal 1ª categoría Fray Damián N.º 4 de Santiago de Cali y la Secretaría de Vivienda de Santiago de Cali (Valle del Cauca)	Derechos de la población desplazada en materia de desalojo forzoso, comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales y el derecho a la vivienda digna de población desplazada	La Corte realizó una reiteración jurisprudencial en materia de los derechos tratados en la sentencia y concede el amparo a los derechos fundamentales a la vivienda digna, la diversidad e identidad étnica, la autonomía de las comunidades indígenas y la especial protección a las personas en situación de desplazamiento.
C-715/12	Derecho a la restitución	Luis Ernesto Vargas Silva	Gustavo Gallón Giraldo y otros, presentan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1448 de 2011, artículos 28, numeral 9 (parcial), 70 (parcial); 72 incisos 1, 2, 4, y 5	Derechos de las víctimas de graves delitos contra los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral-jurisprudencia constitucional/der	Aclara la Corte pronunciamientos referentes a los temas señalados y da luces respecto a la interpretación y la aplicación de la norma demandada.

			(parciales); 73 numeral 1 y 2 (parciales); 74 inciso 6 (parcial); 75 (parcial); 76 inciso 4 (parcial) e inciso 5; 77 numeral 3 y 4 (parciales); 78 (parcial); 84 parágrafo 2 (parcial); 91 inciso 1 (parcial); 99, 120 inciso 3 y 207.	echos de las víctimas de graves delitos contra los derechos humanos a la verdad, justicia y reparación integral, protección sobre los derechos de las personas en situación de desplazamiento frente a la propiedad inmueble, derechos de víctimas de despojo, usurpación y abandono forzado de tierras, alteración o simulación en registro de tierras despojadas, y la pérdida de derechos de las víctimas por el uso, invasión u ocupación de	
--	--	--	--	--	--

				predios objeto de restitución	
SU-254/13	Derecho a la integridad- derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral en el marco del derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado	Luis Ernesto Vargas Silva		Vulneración del derecho a la indemnización administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional- Acción Social, hoy transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social	La corte reconoce el drama humanitario que causa el desplazamiento forzado como un hecho notorio, así como la dimensión desproporcionada del daño antijurídico que causa este grave delito, el cual ha calificado como 1. Una vulneración múltiple, masiva, sistemática y continua de los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento; 2. Una pérdida o afectación grave de todos los derechos fundamentales y de los bienes jurídicos y materiales de esta población, que produce desarraigo, pérdida de la pertenencia, de la autonomía personal, y, por tanto, dependencia, marginalidad, exclusión social y discriminación de esta población; y 3. Por consiguiente, como una situación de extrema vulnerabilidad y debilidad manifiesta, de inusual y gravísima desprotección e indefensión de las víctimas de este delito.

T-206/13	Derecho a la Salud	Jorge Iván Palacio Palacio	Kerly Medina Gutiérrez contra Comfamiliar Huila EPS-S, Hernán Motta Quintero contra Saludcoop EPS, Audiela Tumay Chavita contra Capresoca EPS-S, y María Mercedes Echavarría Echavarría contra Coosalud EPS y otro.	Derecho a la salud y a la vida digna de persona de la tercera edad, derecho a la salud y a la vida digna de menor y principio de continuidad e integralidad en el servicio público de salud	Proteger y amparar los derechos a la salud de la población desplazada en los términos establecidos por la Sentencia.
T-218/14	Derecho a la protección	María Victoria Calle Correa	Acción de tutela presentada por Hernán Seir Valencia Agudelo contra la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las víctimas	Derecho de petición de los desplazados, ayuda humanitaria de emergencia, prórroga de la ayuda humanitaria de emergencia	La Corte expresa que debe ser prorrogada la ayuda humanitaria a aquellas personas que previa determinación del grado de necesidad y de urgencia, se logre verificar su situación de necesidad.

Fuente: elaboración propia

IV. CONCLUSIONES

Al realizar el análisis del alcance de la acción de tutela como mecanismo de protección, amparo y acceso en cuanto herramienta que permite garantizar el mínimo vital de la población desplazada víctima del conflicto armado colombiano, es posible encontrarse con un panorama en el cual la hipótesis se logra confirmar debido a que, tal como es el caso del acceso a las medidas de ayuda humanitaria y la asistencia debida, estas constituyen una elación de sostenimiento vital directo para la población desplazada en Colombia.

La acción de tutela se ha desnaturalizado y ha dejado de ser ese elemento de protección excepcional de derechos, para convertirse en una herramienta de obligatorio uso —o de requisito previo— para el disfrute de la ayuda antes referida.

El mínimo vital, en el caso de la población desplazada, toma un tinte meramente patrimonial que es posible satisfacer, en principio, solo con el acceso a la ayuda de emergencia, pues resulta ser el recurso económico con el que cuenta esa comunidad para iniciar el proceso de dignificación de su ser, al garantizar así la satisfacción de ciertas necesidades esenciales.

En lo que a la función de la acción de tutela se refiere como mecanismo preferente y sumario de protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales, se tiene que, después de explicarla de forma amplia, es posible afirmar que se emplea como una garantía reforzada de derechos, aun cuando no reemplaza acciones de tipo administrativo tendientes de obtener la satisfacción de la entrega oportuna de ayudas a las cuales se tiene derecho por parte de la comunidad desplazada, de manera que se usa como la herramienta principal para la exigibilidad de estas.

Se pudo establecer que si bien quienes ostentan la calidad de víctima poseen una connotación bastante amplia de acciones que debieron haber sufrido para adquirir esa

condición, lo que debe quedar muy claro es que los desplazados hacen parte del conglomerado de víctimas de la violencia a nivel nacional, y son quizás el grupo poblacional más amplio de víctimas con las que cuenta el Estado; por ende, pueden hacer exigible la solicitud de asistencia humanitaria integral.

En cuanto a la definición y el contraste de la noción de mínimo vital que se tiene a nivel constitucional, con el concepto de asistencia humanitaria establecido en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011, es posible consolidar la hipótesis planteada en principio, cuando se expresó que dicha asistencia en el caso de los desplazados configura la garantía del goce al derecho del mínimo vital, y cómo ese derecho lo componen otros varios que se consideran fundamentales y, por tanto, es susceptible de ser exigido mediante acción de tutela.

Aunque la Corte Constitucional reitera que el derecho a la salud se convierte en fundamental por conexidad con el derecho a la vida, se ve en la vida diaria que en el caso de las personas desplazadas víctimas del conflicto armado, cuando se trata de los procedimientos quirúrgicos, la entrega de medicamentos y otros servicios vitales para la preservación de la vida, es necesario pedirlos con tutela.

De la construcción de la línea jurisprudencial con respecto a los desplazados y el mínimo vital podemos inferir que esta se fortalece luego de la expedición de la Sentencia T-025 de 2004, en la cual se establecen con claridad, desde el orden jurisprudencial, los derechos de las personas desplazadas.

V. REFERENCIAS

Arthur Goodhart. *Determining the ratio decidendi of a case*. THE YALE LAW JOURNAL 40(2). Diciembre 1930.

Constitución Política de Colombia [Const]. Julio 7 de 1991 (Colombia). Art. 86.

Corte Constitucional de Colombia. AUTO 006/09. (MP Manuel Cepeda Espinosa: enero 26 de 2009).

Corte Constitucional de Colombia. REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. ACUERDO 5 DE 1992. Disponible en <http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/reglamento.php>

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-547 de 1991. (MP Alejandro Martínez Caballero: 1991).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-501/92. (MP José Gregorio Hernández Galindo: agosto 21 de 1992).

Corte Constitucional. SENTENCIA T-225/93. (MP Vladimiro Naranjo Mesa: Junio 15 de 1993).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-531/93. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: noviembre 11 de 1993).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-559/97. (MP Eduardo Cifuentes Muñoz: 1997).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-250 de 1998. (MP Alejandro Martínez Caballero: mayo 28 de 1998).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-590/98. (MP Alejandro Martínez Caballero: octubre 20 de 1998).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-525/99. (MP Carlos Gaviria Díaz: julio 23 de 1999).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-090/00. (MP Alejandro Martínez Caballero: febrero 2 de 2000).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-789/00. (MP Carlos Gaviria Díaz: junio 28 de 2000).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-1695/00. (MP Marta Victoria SÁCHICA Méndez: diciembre 7 de 2000).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-1306/01. (MP Marco Monroy Cabra: diciembre 6 del 2001).

Constitucional de Colombia SENTENCIA T-215/02. (MP Jaime Córdoba Triviño: marzo 21 de 2002).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-602/03. (MP Jaime Araújo Rentería: julio 23 de 2003).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-025/04. (MP Manuel Cepeda Espinosa: enero 22 de 2004).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-170/04. (MP Rodrigo Escobar Gil: marzo 2 de 2004).

Corte Constituoinal de Colombia. SENTENCIA T-030/05. (MP Jaime Córdoba Triviño: enero 21 de 2005).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-112/05. (MP Jaime Araújo Rentería: febrero 14 de 2005).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-292/06. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: abril 6 de 2006).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-059/2007. (Álvaro Tafur Galvis: febrero 1 de 2007).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-136 de 2007. (MP Jaime Córdoba Triviño: febrero 27 de 2007).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-188/07. (MP Álvaro Tafur Galvis: marzo 15 de 2007).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-328/07. (MP Jaime Córdoba Triviño: mayo 4 de 2007).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-741 de 2007. (MP Marco Gerardo Monroy Cabra: septiembre 20 de 2007).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-285/08. (MP Nilson Pinilla Pinilla: marzo 27 de 2008).

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-760/08. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: julio 31 de 2008).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-483/08. (Rodrigo Escobar Gil: Mayo 15 de 2008).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-1134/08. (MP Manuel José Cepeda Espinosa: 14 noviembre de 2008).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-505/10. (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: junio 17 de 2010).

Corte Constitucional de Colombia. AUTO 364/10 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: noviembre 12 de 2010).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-159/11. (MP Humberto Sierra Porto: marzo 10 de 2011).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA C-715/12. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: septiembre 13 de 2012).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-206/13. (MP Jorge Iván Palacio Palacio: abril 15 de 2013).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-239/13. (MP María Victoria Calle Correa: abril 19 de 2013).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA SU-254/13. (MP Luis Ernesto Vargas Silva: abril 24 de 2013).

Corte Constitucional de Colombia. SENTENCIA T-112/15. (MP Jorge Iván Palacio: marzo 25 de 2015).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estatuto General de la CIDH. Resolución N° 448. (Octubre de 1979).

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo vs. Panamá. Serie C, núm. 72, parr. 76. (Febrero 2 del 2001).

Corte Suprema de Justicia. REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. ACUERDO 1 DE 2002. Disponible en <http://www.cortedecuentas.gob.sv/archivo/blah/Reglamento%20Interno%20CSJ.pdf>

Consejo de Estado. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ESTADO. ACUERDO 58 DE 1999, MODIFICADO POR EL ACUERDO 55 DE 2003. Disponible en <http://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/arbol/9937.htm>

Decreto 2591 de 1991. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Noviembre 19 de 1991.

Decreto 306 de 1992. Por el cual se reglamenta el decreto 2591 de 1991 (Acción de tutela). Febrero 19 de 1992. DO número 40344.

Decreto 1382 de 2000. Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela. Julio 12 de 2000). DO 44082.

Diccionario ilustrado de la lengua castellana. (2009).

Diego Eduardo López Medina. *La línea Jurisprudencial*. EL DERECHO DE LOS JUECES. 2ª edición. Legis. 2011.

Gustavo Zagrebelsky. EL DERECHO DÚCTIL: LEY, DERECHOS, JUSTICIA. Trotta. (1997).
Hernando Devis Echandía. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. Eudeba. (2004).

Jacobo Pérez Escobar. DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. Editorial Temis. (2003).

Jaime Bolívar y Aura Patricia. *Mecanismos de Reparación en perspectiva comparada*. En Catalina Díaz, Nelson Sánchez y Rodrigo Uprimny (eds.). REPARAR EN COLOMBIA: LOS DILEMAS EN CONTEXTOS DE CONFLICTO, POBREZA Y EXCLUSIÓN. Centro Internacional para la justicia transicional y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. 2009.

José Barreto Rodríguez. ACCIÓN DE TUTELA: TEORÍA Y PRÁCTICA. Legis Editores. (2001).

Jorge Flórez. CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO. Señal Ediciones. (2011).

Ley 16 de 1972. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. Diciembre 30 de 1972. DO 33780.

Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia. Marzo 15 de 1996. DO 42745.

Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia. Julio 18 de 1997.

Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios. Julio 25 de 2005. DO 45980. Artículo 23.

Ley 1285 de 2009. Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. Enero 22 de 1996. DO 47240.

Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10 de 2011. DO 48096.

Luigi Ferrajoli. LOS FUNDAMENTOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Trotta. (2001).

Luigi Ferrajoli. DERECHO Y RAZÓN. TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL. Editorial Trotta. (2005).

Mabel Goldstein. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Editora Cultural Internacional. (2010).

Manuel Quinche. LA ACCIÓN DE TUTELA. EL AMPARO EN COLOMBIA. Editorial Temis. (2011).

Naciones Unidas. A. G. *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. (Diciembre 10 de 1948).

Organización de Estados Americanos. CIDH. *Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1999*. OEA/Ser.L/V/II.106, doc. 3. (Abril 13 del 2000).

Pablo de Greiff. Justice and Reparations. THE HANDBOOK OF REPARATIONS. Oxford Scholarship. 2006

Robert Alexy. TEORÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Centro de Estudios Constitucionales. (2008).

Tulio Chinchilla. ¿QUÉ SON Y CUÁLES SON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES? Temis. (1999).